

N.º 348
3 de septiembre
de 2020
Apoyo:
1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN
y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrero.org
www.informacionobrero.org

Como dicen los pensionistas «Gobierne quien gobierne»



Pedro Sánchez con Patricia Botín y Pablo Iglesias

CATALUÑA



Ante un nuevo
11 de septiembre **pág. 3**

SANIDAD:

Huelga de los MIR
en Madrid **pág. 4**

PENSIONES:

La COESPE, factor de
orden **pág. 7**

ENSEÑANZA:

Huelga necesaria
a extender **pág. 8**

INTERNACIONAL:

Bielorrusia,
Lukashenko ¡vete!
pág. 11

Estados Unidos,
violencia y explosión
revolucionaria **pag. 12**

EDITORIAL

¿Al servicio de quién está el Gobierno?

La conferencia del Presidente del Gobierno de este lunes 31 de agosto en la Casa de América de Madrid —a la que ha invitado a los “agentes sociales”, a los representantes del poder económico y a algunas personalidades del mundo cultural y social— plantea sin duda varias preguntas desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y los pueblos, de la mayoría social. En particular, porque desde la constitución del gobierno Sánchez-Iglesias, éste ha pretendido presentarse como un gobierno progresista.

El que Pedro Sánchez y nuestros principales dirigentes sindicales aparezcan juntos en un mitin proclamando intereses comunes, ¿puede ser interpretado como una respuesta positiva a las exigencias y justas reivindicaciones de la mayoría?

En este acto les hemos visto también codo con codo junto a los principales exponentes del gran capital, los representantes del IBEX 35, todos ellos hablando de “unidad” para luchar juntos contra la pandemia y salir de la crisis.

Pero la crisis agravada por la pandemia ha mostrado más que nunca las diferencias de clase (basta con ver el número de contagiados en barrios obreros y en los de clases acomodadas), así como los intereses irreconciliables entre la banca, el gran capital, y los trabajadores. Y, más allá de los asalariados, ¿qué pueden esperar los 10 millones de pensionistas de los defensores de la liquidación del sistema público de pensiones? ¿Qué pueden esperar los trabajadores amenazados de despido de los partidarios acérrimos de las reformas laborales, que incluso piden ahora una nueva reforma laboral?

Las decenas de miles de médicos y el personal de la sanidad, en primera línea contra la pandemia, y a los que se les siguen negando los recursos e incluso el empleo, ¿qué pueden esperar de los partidarios de la privatización de la sanidad?

¿Qué pueden esperar los miles de padres y madres de la escuela pública de los que defienden con uñas y dientes los intereses de la Iglesia y los demás patronos del negocio de la concertada? ¿Qué pueden esperar de ellos los estudiantes de la escuela y las universidades públicas?

A muchos les cuesta reconocer en esto lo que esperaban del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

Porque, seamos claros, después de 99 días de duro confinamiento la población se ve de nuevo confrontada con una difícil situación, y comprueba que, en esos más de seis meses, no se abordó ninguna medida cualitativa para hacer frente a la epidemia y al conjunto de las necesidades sanitarias. Apenas ha habido dinero para los gastos sanitarios más urgentes, 2.000 millones para la enseñanza, y cientos de miles de millones en avales del Estado a las grandes empresas que tienen sus fondos en los paraísos fiscales.

¿Ahora se ponen a buscar a toda prisa rastreadores? Como dice un mensaje que corre por las redes, si los militares se van a dedicar a hacer el trabajo de los sanitarios, es que sobran militares y faltan sanitarios.

Parece como si sólo se hubieran tomado medidas represivas en continuidad con la aplicación exhaustiva de la ley mordaza, mientras se ha permitido el caos reinante en la educación y otros sectores. Y los privados parásitos han hecho más que nunca su agosto a costa del Gobierno y las autonomías.

Y encima todos se tiran los trastos a la cabeza ante la mirada atónita e indignada de la mayoría de la población.

¿Quién manda aquí?

Esta es la pregunta que un número creciente de trabajadores y ciudadanos se plantea. Cuando se ve a la policía no sólo permitir, sino aplaudir, las manifestaciones de la derecha. Cuando se ve al Gobierno permitir la huida del rey emérito, para que no pueda responder de sus actos. Cuando todo un vicepresidente del Gobierno se queja en público de que ni jueces ni policías le protegen del acoso de los ultraderechistas a él y a su familia. Cuando se permite a las multinacionales ac-

tuar a su guisa como Nissan, cuando se mantiene en la cárcel a militantes políticos como los republicanos catalanes, o los jóvenes de Alsasua, por simples razones políticas, bueno es preguntarse quién manda aquí, y al servicio de quién. Y qué hace el gobierno que se autotitula “progresista”.

Y más en una situación en que se anuncian unos presupuestos determinados por las “condiciones” que los gobiernos europeos más fuertes y el Consejo Europeo quieren imponer para otorgar las supuestas ayudas. El Estado gastaría una fortuna en financiar los “negocios de futuro” de los grandes financieros, mientras se sangraría a la mayoría de la población y los ya esquilmados servicios públicos para pagar la deuda de ese dispendio.

En esta situación, la voluntad de los trabajadores, de los jóvenes, de los pensionistas, de los autónomos, no puede ser más que resistir, concentrarse en su lucha por las reivindicaciones, aplicando el “gobierne quien gobierne”. Los militantes y las organizaciones que se reclaman de la clase obrera están confrontados al siguiente dilema: oponerse a los planes del capital financiero, u organizar la resistencia. En este sentido, a iniciativa del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos cientos de activistas y responsables propugnan cada uno desde su ámbito la reconstrucción de los derechos. Y delegados de esos colectivos se disponen a discutir juntos, en una Conferencia Estatal el 7 de noviembre, cómo conjuntar energías para defender los derechos frente al poder monárquico parásito, abriendo el camino a la República como instrumento de la soberanía de los pueblos.

El mal «parto» del Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital era para muchas personas que venimos luchando desde hace años porque no haya hogares sin ingresos como ese niño tan deseado.

Y estábamos muy felices y contentos cuando se anunció el «embarazo» el 29 de mayo de 2020 (fecha de aprobación del decreto) con rueda de prensa del ministro Escrivá y del Vicepresidente Segundo Pablo Iglesias, donde nos explicaban los detalles y lo importante que era la conquista de este nuevo derecho social.

Efectivamente era y debe de ser un gran logro para el «Estado de Bienestar», para nuestra sociedad... Pero tal vez porque fue un Ingreso Mínimo Vital aprobado con la urgencia que para los políticos marcaba el Estado de Alarma (la urgencia ya existía hace años para los 600.000 hogares y el 1.250.000 de personas desempleadas sin ningún ingreso) el caso es que el «bebé» nació prematuro y ya se vio desde el momento del «parto», desde el 15 de junio que se pudo empezar a solicitar, que el «bebé» vino al mundo de prisa y corriendo y que no iba a ser fácil su vida.

Se anunció que quienes tuvieran hijos menores y cobrasen la ayuda de «los puntos» lo recibirían de oficio el 26 de junio. Pero de 250.000 familias con menores solo lo recibieron 74.100. Las otras 175.000 familias perdieron 15 días (y más) en solicitarlo esperando si les llegaba «de oficio».

Desde que se abrió la web para poder solicitarlo (15 de junio) se vio que tramitarlo no iba a ser tan sencillo como había anunciado el ministro Escrivá. No todas las personas tienen la capacidad intelectual suficiente (algunas personas no saben leer o escribir) para interpretar el documento de solicitud y las preguntas (como se demuestra ahora que se empiezan a ver solicitudes denegadas por errores a la hora de marcar casillas), como por cuestiones técnicas (no todas las personas tienen ordenador, internet para acceder a la web de la Seguridad Social o un teléfono que les permita subir documentos, imágenes...).

No sirve eso que decía el ministro: «Que pidan ayuda a las ONG para tramitarlo». La ayuda, hasta para rellenarlo, deben darla los propios funcionarios de la Seguridad Social. Para ello se debe dar más asistencia personal (no se entiende que esté casi todo abierto sin cita previa menos los organismos públicos) y si es necesario aumentando la plantilla de funcionarios (es justo reconocer que si ya tenían trabajo con las pensiones, altas y bajas de trabajadores y otras gestiones ahora se les ha ampliado el volumen de trabajo con el Ingreso Mínimo Vital). Lo que no parece que haya sido suficiente ha sido contratar una empresa pública (Tregsatec) que además de costar unos cuantos millones ha recibido denuncias públicas en



Hasta el 17 de agosto se habían aprobado 6.000 solicitudes para obtener el Ingreso Mínimo Vital de las 750.000 solicitudes recibidas

los medios de comunicación de algunos trabajadores de recibir órdenes de paralizar solicitudes perfectas.

Las personas que han sido capaces de hacer sus solicitudes por sí solos, con la ayuda de otras personas, ONG, algún partido o incluso pagando un gestor (hogares sin ingresos buscando dinero como sea para pagarlo) se encontraron con la gran cantidad de requisitos.

Está claro que la forma más fácil de eliminar beneficiarios es poner la mayor cantidad de requisitos posibles: A más requisitos menos beneficiarios y menos gasto presupuestario.

Esos requisitos están provocando, junto con errores de la Seguridad Social que aún no sabemos si son fallos informáticos, de los robots o del cruce de datos con la Agencia Tributaria, que hasta el 7 de agosto, solo se hubiesen aprobado 3.966 solicitudes en información facilitada por Transparencia de la Seguridad Social a la Asociación Víctimas del Paro y que esa cifra solo aumentase, el 17 de agosto, hasta las 6.000 solicitudes aprobadas junto a 32.000 denegadas... De un total de 750.000 solicitudes recibidas.

Desde el 15 de junio al 17 de agosto, en dos meses, solo 6.000 solicitudes aprobadas de 750.000 solicitudes enviadas.

Solicitantes que además del sufrimiento de no tener ingresos suficientes, se les une ahora la ansiedad y el estrés que produce ver que pasan los días, las semanas y los meses y no

saben qué pasa con su solicitud. Los afortunados que tienen código para consultar su estado ven que no pasa de «en estudio». Y a medida que se acerca el plazo de los 90 días aumenta en ellos el temor que a partir del 15 de septiembre se empiece a aplicar el «silencio administrativo».

Considero que un gobierno progresista debe hacer todo lo posible para garantizar una vida digna a toda la ciudadanía, asegurando trabajo (vaya si se podría hacer un Plan Estatal de Empleo y Actividad para todas las personas desempleadas) o al menos que no haya hogares sin ingresos.

El Ingreso Mínimo Vital es una gran medida si se hace bien y ello es posible con MENOS requisitos, MENOS trámites, MÁS atención personalizada, MÁS presupuesto... Para que haya MÁS beneficiarios.

Hay un detalle muy importante que debemos recordar a todas las personas: que, aunque el «parto» del Ingreso Mínimo Vital no haya sido como nos gustaría aún sería peor si hubiese gobernado la derecha o la ultraderecha pues ellos ni lo hubiesen aprobado. Esas derechas que en las autonomías donde gobiernan no han perdido ni un segundo en parar sus rentas mínimas autonómicas para que no se pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital.

Joaquín García Martín.
Presidente de la Asociación de Víctimas del Paro

Entrevistamos a Saúl García Cortés, delegado CCOO No se dan las condiciones de seguridad en Metro de Madrid

Saúl es miembro del comité de empresa de Metro de Madrid donde trabaja como maquinista. Se han multiplicado las imágenes de aglomeraciones en el Metro mientras las autoridades responsables, el gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) exige y multa a los que no mantiene la distancia de 1,5 metros. Unido a que según los especialistas la mayor parte de los contagios se producen por aerosoles hacen de Metro de Madrid un peligro de contagio tremendo.

Información Obrera: ¿También para los trabajadores?

Saúl García Cortés: Claro. De hecho, hemos tenido muchas bajas, algunos fallecidos y mucha gente aislada. Ahora ha bajado pero nos tememos que con la vuelta al trabajo y a los colegios y universidades de forma presencial esto se pueda reproducir.

IO: ¿Qué medidas habéis planteado?

SGC: Llevamos mucho tiempo diciendo que la plantilla está bajo mínimos. Esto ya antes de la pandemia. Ahora tenemos una situación en la que cada día se quedan 80 trenes sin salir por falta de maquinistas. Y, claro, cuantos menos trenes, más tiempo de espera y más gente en los vagones.

IO: Y la empresa pide horas extras.

SGC: Lo primero que quiero señalar es que por su prepotencia no piden ayuda o negociar para ver cómo salir de esta situación. Por su cuenta y riesgo han hecho una nota en la que piden a la gente, fundamentalmente a los conductores, que

hagan horas extras para paliar la situación. Por supuesto la respuesta es prácticamente nula. Nadie va a echar horas mientras no negocien y contraten a nuevos maquinistas.

IO: ¿Hay una bolsa de maquinistas?

SGC: Sí. La última bolsa era de 400 maquinistas. De estos entraron 100 el año pasado y éste 45 más. Y ahora nos han comunicado que van a contratar a otros 93 hasta final de año. Qué duda cabe que se han visto obligados ante la falta de horas extras. Pero seguimos exigiendo que contraten a los que se necesitan y no con cuentagotas. De hecho la empresa dice que pide horas extras y contrata gente no por el funcionamiento normal de Metro sino por la COVID. Cuando no han sido capaces de cumplir con la tabla de trenes ni siquiera en agosto que hay mucha menos actividad. Y la



Saúl García Cortés a la izquierda junto a otros dos trabajadores del metro de Madrid

falta de personal no es solo en maquinistas. Hay falta de personal de estaciones (más del 30% de estaciones sin cubrir por personal de Metro), y la falta de personal de oficio (más del 40% de las tareas de mantenimiento externalizadas).

IO: ¿Cómo lleváis la preparación del encuentro del CATP de noviembre?

SGC: Bueno, aquí recogimos un buen número de firmas del llamamiento y estaremos sin duda en el encuentro sea presencial o por internet. Creemos necesario que todos luchemos contra los recortes.

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arrizabaldo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

C/ DESEÑAÑO 12, 1ª3A 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org



Ya puedes conseguir el nuevo calendario republicano para el año 2021.

Puedes pedirlo por correo io@informacionobrera.org o a nuestros distribuidores.

No te lo pierdas. Este calendario sirve para garantizar nuestra publicación e ir creciendo en contenidos y páginas.

La elaboración de los Presupuestos para 2021



La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero (izquierda), y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño

Desde estas páginas venimos señalando que la política económica de los próximos diez años al menos -es decir, la política con mayúsculas, los Presupuestos del Estado en primer lugar-, va a estar determinada por el llamado acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción, pactado entre la Comisión Europea y los gobiernos de la UE. Frente a este acuerdo de «reconstrucción», el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias solo tiene dos opciones: aplicarlo o romperlo. Los dos componentes del Gobierno han presentado ese acuerdo como una victoria del Gobierno «progresista», como un acuerdo histórico que demuestra que, defendiendo las instituciones de UE, hay espacio para la soberanía de los gobiernos. Mienten porque su voluntad política es aplicarlo al pie de la letra.

Los Presupuestos para 2021

Para que el Gobierno empiece a recibir en 2021 los 140.000 millones (de los que aproximadamente la mitad son préstamos) del fondo de «reconstrucción» asignados a España, tendrá que presentar un plan detallado sobre la utilización de esos fondos, que deben contar con la aprobación de la mayoría de los gobiernos de la

UE. Por su parte, la Comisión Europea se reserva el control permanente de la ejecución del plan, con la potestad de cortar el suministro de fondos ante la contingencia de que el plan no se cumpla según lo comprometido. ¿Dónde queda aquí la pretendida «soberanía» del Gobierno? Defender este acuerdo supone que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aceptan voluntariamente someterse al imperialismo.

Si nos ceñimos a las repercusiones más directas del acuerdo sobre las líneas presupuestarias, según recoge la letra del mismo: «necesitamos unas medidas de recuperación [tales como las que] vienen definiendo nuestras políticas presupuestarias desde 1988 y ofrecen unas perspectivas a largo plazo», se trata, pues, de la continuidad permanente de los recortes y de la política de ajuste que tan bien conocemos: privatización de la sanidad y de los servicios públicos, destrucción de derechos laborales, recorte drástico de las pensiones y subida de impuestos a los trabajadores. Hay algunas cuestiones que parecen claras en esta línea, que no agotan las medidas contenidas en las condiciones para la liberación de los fondos, pero que deben tener su reflejo en los Presupuestos:

-La subida de impuestos indirectos (IVA, impuestos ecológicos y sobre transacciones financieras). Se trata de impuestos al consumo que pagarán en su inmensa mayoría las personas que viven de su salario; igualmente, una reforma del IRPF, supuestamente para que los ricos paguen más, descansaría en lo fundamental sobre la población trabajadora.

-El recorte de las pensiones, en continuidad con todos los acuerdos realizados a partir del Pacto de Toledo: alargar la edad de jubilación, desvincular la revalorización de las pensiones del IPC, recortar las pensiones en función de la esperanza de vida, etc.

-Recorte o al menos contención de los presupuestos de la sanidad y la educación públicas.

Un pacto difícil de atar

Estas medidas, que se presentan como «necesarias», se acompañan de subvenciones y del apoyo directo a las grandes empresas, al capital financiero. Y tienen enfrente al conjunto de los trabajadores, representados en la movilización de los pensionistas, de los trabajadores de la sanidad, de la enseñanza, de la clase obrera industrial. Sin embargo, para la población trabajadora, se trata de que la resistencia pueda expresarse haciendo la unidad, arrastrando a los sindicatos para revertir los recortes, para impedir la continuidad de esas políticas de ajuste elaboradas e impulsadas por la Unión Europea y que aplicadas por los gobiernos están arrasando con los derechos obreros y democráticos en toda Europa.

Esta contradicción es la que hace que no haya un acuerdo claro sobre los Presupuestos, el consenso en torno a ellos, un consenso que tiene fecha de caducidad: el mes de octubre el Gobierno debe presentar su plan, los Presupuestos del Estado a la Comisión Europea.

En la actual situación de crisis política e institucional en la que se acumulan los ingredientes que pueden conducir al estallido social, se entiende la operación de «unidad nacional» para imponer, en nombre de la pandemia y de la recesión, unos Presupuestos realizados al dictado del capital financiero.

Seguiremos informando en los siguientes números de *Información Obrera*.

Blas Ortega



RECIENTEMENTE APARECIDO EL IO ESPECIAL Nº 17 QUE PODÉIS ENCONTRAR EN NUESTRA WEB.

EN EL PODRÉIS ENCONTRAR ENTRE OTROS ARTÍCULOS:

- Crisis de la COVID-19, movilizaciones en la sanidad
- Campaña de la COESPE por auditoría
- Entrevista a Conchita Ribera, portavoz de COESPE
- Reflexiones sobre el acuerdo de Nissan
- Desde Grecia, por un encuentro obrero europeo
- Solidaridad con el pueblo libanés

Ante un nuevo 11 de septiembre en Cataluña

Con la incógnita todavía de si podrán celebrarse o no las diversas concentraciones convocadas por la ANC, este 11 de septiembre no está levantando ninguna expectativa y no solo por la situación de pandemia. Y sin embargo, la lucha por la soberanía del pueblo de Cataluña, por el ejercicio del derecho a la autodeterminación continúa vigente. Reivindicaciones que se unen a la exigencia de libertad de los presos republicanos, cuya situación es inaceptable para cualquiera que se reclame de la democracia. Al respecto, hay que decir una vez más que el gobierno PSOE-UP no tiene ningún derecho a permanecer «neutral» ante esta situación, cuando las instituciones heredadas del franquismo han demostrado fehacientemente que no lo son.

En efecto, en medio de la pelea sin fin y del cruce de acusaciones entre las diversas fracciones del independentismo, las convocatorias de concentraciones (90 en 62 municipios) no parece que respondan a las necesidades del momento, sobre todo si se tiene en cuenta los objetivos que las presiden. En la línea de las convocatorias de los últimos años, dirigidas a quienes se reclaman de la independencia como solución para todos los problemas, los portavoces de la ANC explicaron en rueda de prensa que se trataba de realizar una acción descentralizada «delante de diferentes edificios de la administración estatal española» (el Servicio Público de Empleo, las Oficinas de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social), con el objetivo de «denunciar la discriminación que padece Cataluña y reivindicar la independencia como único medio para poder disponer de todos los instrumentos necesarios para salir de esta crisis con garantías y construir un futuro mejor».

Desde luego, si de lo que se trata es de buscar los «instrumentos necesarios» para

poder hacer frente a esta situación y de esta manera afrontar los problemas «con garantías», tener la capacidad de poder ponerlos en marcha es importantísimo. Sin embargo, tras este tipo de discursos, nunca se explicita qué es lo que se haría en caso de tenerlos. Por ejemplo, ¿para salvar todos los puestos de trabajo, se expropiaría Nissan -sin indemnización- y se pondría bajo control obrero? Porque si la referencia más cercana que se puede tener es lo que se está haciendo desde el gobierno de la Generalitat en estos momentos para hacer frente a la extensión de la pandemia, cualquiera puede legítimamente desconfiar. Nada impide al gobierno de la Generalitat contratar más rastreadores, más personal sanitario... y no lo hace. En todo caso, lo que impide hacer todo esto por parte de los gobiernos «autonómicos», son las leyes de estabilidad presupuestaria que golpean a todos, sobre las que curiosamente, nunca se dice nada, ni se llama a combatir las medidas que imponen las instituciones del capital financiero que subyugan a todos los pueblos.

De buen seguro que los trabajadores del Servicio Público de Empleo agradecerían que las concentraciones que se proyectan realizar ante sus centros de trabajo lo fueran para denunciar las condiciones en las que deben realizar su trabajo (en estos momentos vital para muchos ciudadanos que necesitan que se les gestione con celeridad las prestaciones a las que tienen derecho; hay que recordar que en la actualidad hay 150.000 trabajadores en Cataluña afectados por ERTE que no han percibido ni un euro desde el mes de marzo!) y no tanto, o mucho menos, para denunciar su presencia como representantes de la administración «opresora». De igual manera que los trabajadores de la sanidad catalana o todo el personal docente, clama contra los efectos de-



vastadores que han tenido las políticas de recortes en el último decenio, que les imposibilita hacer bien su trabajo, sin encontrar respuestas favorables por parte de quien tiene la potestad para hacerlo.

Hacer bandera identitaria de problemas que son comunes, además de situarlos en un terreno falso, no facilita ninguna solución positiva. Los universitarios catalanes son los que pagan las tasas académicas más altas. En este sentido son los más «discriminados» de todo el Estado español. Sin embargo el origen de esta «discriminación» es preciso recordarlo: en 2012, aprovechando las disposiciones del gobierno Rajoy -con el ministro Wert al frente- que permitían a las comunidades autónomas ampliar entre un 15% y un 25% el coste de la

matrícula, el gobierno de Artur Mas, mientras aplicaba la tijera en el presupuesto de Enseñanza, situó las tasas académicas en la banda alta de la horquilla, incrementándose las matrículas un 66% (en el debate sobre Presupuestos de la Generalitat, Pere Aragonés se ha comprometido a rebajar las tasas académicas un 30%).

Los servicios públicos, los trabajadores catalanes, están afectados por las mismas políticas que se aplican a todos los trabajadores del resto del Estado. Por eso concierne a todos combatirlas. Levantar un potente movimiento que aúne a todos sigue siendo una tarea pendiente, un objetivo ineludible. También para este 11 de septiembre.

José Antonio Pozo

Huelga general de los médicos residentes de Madrid Ganar las reivindicaciones mediante la movilización

Entrevistamos a Romualdo Chaviano Grajera, médico interno residente (MIR) de tercer año de anestesiología en el Hospital Universitario La Paz, además de delegado sindical por el sindicato MATS y miembro del Comité de Empresa del personal laboral en formación de la CAM. Es un colectivo sanitario muy importante, cuando se incorporen los nuevos residentes en septiembre, en Madrid habrá en torno a los 5.500 de ellos. Su movilización constituye una llamada a todo el sector sanitario y al conjunto de los trabajadores a luchar por la reconquista de derechos y las reivindicaciones.

Información Obrera: Los MIR suspenden la huelga lanzada el 13 de junio y aplazan su eventual reinicio a septiembre. ¿Qué motivó la huelga?

Romualdo Chaviano: El motivo de la movilización ha sido la exigencia de un Convenio Colectivo que regule la situación especial de los residentes en formación de distintas especialidades en Ciencias de la Salud (medicina, enfermería, psicología, biología, radiofísica, química y farmacología) en la Comunidad de Madrid. Como personal en formación tenemos un contrato de doble naturaleza: asistencial y formativo. Sin embargo la realidad es que somos utilizados para desempeñar exclusivamente la tarea asistencial. Con ello realizamos el trabajo que debiera ser ocupado por médicos especialistas.

IO: ¿Qué habéis conseguido?

RCH: Se han conseguido algunos puntos muy importantes, muchos de los cuales ya estaban recogidos en la ley pero no se aplicaban, algunos pueden pensar que es un logro a medias pero nosotros lo consideramos una victoria. Gran parte ha sido conseguir derechos que se habían perdido, como:

Cobrar el 100% de las pagas extras, que cuando empezó la crisis, en el 2011, nos la redujeron al 50% aproximadamente.

En salientes de guardias de 24 horas, tener derecho a un descanso de al menos 12 horas. Hay que recordar que en torno al 40% de los residentes no disponían de esta libranza de guardia, pudiendo acumular hasta 32 horas de trabajo ininterrumpidas.

Por otro lado hemos conseguido la libranza de los sábados, mediante la cual si haces guardia este día podríamos librar el lunes. Según la ley, el trabajador tiene derecho a 36 horas de descanso continuado a la semana.

Además, en el aspecto retributivo, se ha conseguido un aumento de 110 euros al mes.

IO: ¿Y cuáles son las reivindicaciones pendientes?

RCH: Entre las reivindicaciones pendientes, señalo en primer lugar, que los acuerdos salgan en el BCAM y se apliquen ya, pues deben entrar en vigor en septiembre. Y por supuesto queda conseguir la elaboración de un Convenio Colectivo de nuestro sector de médicos residentes, puesto que como personal laboral que somos tenemos derecho a tener uno. En él se seguirá trabajando los aspectos laborales, formativos y

retributivos que necesitan un estudio más a fondo.

IO: ¿Cuáles son vuestras condiciones de trabajo?

RCH: Las condiciones de trabajo de los hospitales son duras, y sobre eso hoy día hay un acuerdo generalizado. La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto aún más las consecuencias de toda la política de recortes y la falta de medios y personal.

Centrándonos en nuestro colectivo, y como exponente de la situación, mencionar el problema de las camas calientes. En los turnos de descanso durante las guardias tenemos que acostarnos en las camas del turno que se incorpora al trabajo, sin cambio de sábanas ni almohadas, hacinados en estrechas habitaciones. Es una situación de alto riesgo en el contexto de la pandemia.

Hay sitios donde no se nos proporciona la comida durante las guardias (...).

Por último, la mayoría de nosotros estamos obligados a hacer horas extras que no se pagan ni se registran como tales.

IO: ¿Y la formación, dónde se queda?

RCH: Efectivamente, una parte muy importante de nuestro trabajo deberá ser mejorar las posibilidades de formación y los medios necesarios para ello.

Nuestros objetivos en este campo se pueden resumir así:

Conseguir una ratio de no más de 4 residentes por médico adjunto (...).

Aumentar los días disponibles para formación (...).

Pedimos disponer de al menos una rotación de 4 meses seguidos de rotaciones que no pueda ser denegada.

Esto requiere la existencia de planes de formación establecidos desde la Comunidad Autónoma que sean llevadas a cabo por las Unidades Docentes de los hospitales.

IO: Es muy útil la descripción que haces de vuestro trabajo y reivindicaciones. Hablemos de la huelga.

RCH: A primeros de junio se anunció la posible convocatoria de una huelga por parte de la Asociación de Médicos y Trabajadores de la Sanidad (AMYTS). El resto de sindicatos que formamos el Comité de Empresa (CCOO, CSIT-UP y el MATS) propusimos a AMYTS una convocatoria conjunta de la huelga, que fue rechazada por este sindicato por el deseo



de controlar en solitario el rumbo de la huelga. Aun con todo, mi sindicato (MATS), decidió apoyar de forma incondicional las movilizaciones.

La modalidad de huelga convocada fue del 100% para los lunes y solo de guardias de martes a domingo. La Comunidad Autónoma impuso unos servicios mínimos del 100% para las guardias, de forma que en la práctica la huelga se redujo a la mañana de los lunes desde el 13 de julio hasta el 10 de agosto, con un seguimiento masivo y la comprensión y apoyo de todos los colectivos sanitarios.

Durante la huelga llevamos a cabo movilizaciones ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Sagasta, y desde allí nos dirigíamos a la Puerta del Sol, delante de la presidencia de la Comunidad de Madrid. También en las puertas de los hospitales se realizaron concentraciones, y toda una serie de actividades de extensión e información sobre los motivos de la huelga.

IO: ¿Cómo habéis conducido la huelga?

RCH: Ha habido asambleas en muchos hospitales. Se constituyó un Comité de Huelga elegido por los delegados de AMYTS, con representantes de cada hospital. Sin embargo, las negociaciones con la Administración las llevaron exclusivamente miembros de este sindicato.

En algunos hospitales se realizaron asambleas regularmente en las que se aprobaban propuestas de acción que se trasladaban a una asamblea interhospitalaria que se reunía todas las semanas. Gracias a estas propuestas se consiguió que las interhospitalarias dejaran de tener un carácter informativo para pasar a otro con mayor capacidad de decisión.

Fueron necesarias cinco semanas de huelga para que la Administración mostrase disposición negociadora.

IO: ¿Cómo se decidió concluir la huelga?

RCH: Cuando la Administración acordó algunas reivindicaciones importantes una votación del Comité de Huelga acordó su cese. Pensamos que esa decisión tendría que, al menos, haberse trasladado a las Asambleas para dar a los huelguistas la posibilidad de expresar su opinión.

IO: ¿Cómo pensáis continuar en septiembre?

RCH: Debo decir, que los residentes estamos contentos con lo conseguido hasta ahora y que debemos estar alerta para que sea aplicado a partir de septiembre.

Somos además conscientes de que lo conseguido se debe exclusivamente a la voluntad de pelear por las reivindicaciones mediante la movilización, la asamblea de trabajadores y la unidad.

Ahora nos preparamos para abordar en Septiembre el mantenimiento de la lucha por las reivindicaciones y reactivar la plataforma Huelga MIR-Madrid.

IO: ¿Habéis tenido apoyos de otros colectivos u otros sectores en lucha?

RCH: Te adjunto una lista de los apoyos recibidos [siguen 44 organizaciones, entre ellas UGT, CC OO, CNT, organizaciones de médicos, asociaciones vecinales y de pensionistas]. Por nuestra parte nos gustaría devolver los apoyos a todas aquellas organizaciones que buscan salir de la precariedad a través de la unidad entre los compañeros y la inconformidad.

Juan Miguel Fernández

Puedes leer la entrevista entera en nuestra web - <http://www.informacionobrero.org>

En 2019 el Estado español perdió 4.100 médicos

Nekane Murga, consejera de sanidad del Gobierno Vasco: «No tenemos sanitarios para cubrir las bajas por enfermedad, ni las vacaciones»

En enfermería del OSI de Álava no hay gente para contratar, ya que la bolsa de empleo de Osakidetza está vacía, así las bajas no se cubren porque no hay personal.

Dicen que la ampliación de la titulación de tres a cuatro años dejó un año vacío, dado que de cada promoción salen unas 80 profesionales, que no dan para cubrir las plazas necesarias entre centros de salud, residencias, hospitales, etc. Evidentemente, si esto era antes de la COVID, ahora mucho menos. Y no estamos contando las jubilaciones, que no se cubren.

Lo mismo que con los médicos y enfermería ocurre con los auxiliares de enfermería, tampoco hay gente suficiente.

Sin embargo, hay miles de médicos y enfermeras que se han ido del país, porque aquí no están bien remunerados, a otros países con mejores salarios. Entre ellos Gran Bretaña, y lo dice gente que sabe:

«El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha expedido un total de 4.100 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una cifra que supone un crecimiento de un 18,7 por ciento respecto a los datos de 2018, cuando se expidieron 3.452, según confirman los números recaudados hasta el 31 de diciembre de 2019» (Fuente: Redacción médica).



Es esta situación previa a la pandemia y la falta de contratación y mejoras en las condiciones de trabajo de los sanitarios y trabajadores auxiliares de la sanidad, la que ha provocado que muchos sanitarios no hayan tenido vacaciones, bien porque le

correspondían justo cuando empezó el pico de la pandemia o después porque no hay personal suficiente, con lo que ello conlleva para su propia salud y para la atención a los pacientes.

Se supone que son estos profesionales los que debieran estar al cien por cien, pues nuestra vida está en sus manos.

Añadido a esto tenemos la problemática de las urgencias, respecto a las cuales los irresponsables institucionales no cesan de echarnos la culpa a los ciudadanos de colapsarlas.

En realidad, el proceso es sencillo: pides una cita y te la dan con más de un mes incluso para un médico de familia. Esto lleva a que, como ninguno somos médicos, ante esta tardanza te vas a urgencias.

Por eso hay que exigir a este Gobierno que deje de dar dinero a los capitalistas y que ese dinero se dedique a la sanidad pública, que contrate los profesionales y trabajadores necesarios, y que mejore las condiciones salariales de los que ya trabajan.

La debida actuación de las confederaciones sindicales UGT y CCOO en este terreno es fundamental, sin dejar solas a las federaciones de la sanidad. Como los pensionistas, de Cádiz a Bilbao y de Barcelona a La Coruña.

J.A. Novoa (Vitoria-Gasteiz)

¿Represión para luchar contra la COVID?

El gobierno anunció 11 medidas contra la COVID que en lo esencial se limitan a restringir los movimientos y a prohibir fumar, botellón, ocio nocturno...etc. Sobre los eventos multitudinarios se aconseja hacer *evaluación de riesgo*. Y de las medidas sanitarias lo que plantea es hacer cribados en según qué sitios y hacer pruebas a los nuevos ingresos en residencias o a trabajadores que vuelvan de vacaciones.

Pero lo que sabemos, dentro de la gran confusión y desinformación que hay, es que estas medidas están muy lejos de lo que se necesita.

¿Qué medidas hay que adoptar?

Por ejemplo aumentar los rastreadores. Son esenciales, hay muy pocos y se ha intentado hacer el rastreo con voluntarios, con empresas privadas, ahora con militares, etc. Se necesitan rastreadores preparados y suficientes. Esto permitiría detectar precozmente los focos y tomar otras medidas.

Otra medida urgente y necesaria sería la de reforzar la atención primaria y la hospitalaria. Nada de eso hay. Otra sería la de reforzar las residencias de mayores o intervenirlas si no se toman medidas para garantizar la salud de los residentes y trabajadores, sin aislar a los mayores y garantizando las visitas con seguridad.

Habría que garantizar que los transportes públicos no van abarrotados. Que en las empresas, como en los *call centers*, se dan las condiciones de seguridad adecuadas para evitar contagios por hacinamiento. Acabamos de conocer que en una empresa navarra se han detectados más de 200 contagios. Garantizar a los temporeros unas condiciones de habitabilidad adecuada y no tratarlos como a animales como en el caso de Albacete.

Prohibir eventos como las corridas de toros y los eventos religiosos que reúnen a miles de personas. Garantizar una vuelta a las clases con medios suficientes. Medios médicos en colegios, separación en las aulas, contratación de profesores y otro personal para garantizarlo. Medios sanitarios gratuitos rápidos y efectivos (mascarillas, guantes, geles, etc.) y PCR para todo el personal de riesgo. Lo que supone poner la producción al servicio de la mayoría y no de los especuladores.

Se opta por la represión

Sin embargo vemos que las medidas van en el sentido de culpar a la gente. De poner multas, impedir ocio. Lo de las mascarillas llega al paroxismo. Policías pegando a chavales, deteniendo a gente, y ayuntamientos ufanándose de las multas que ponen.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado ha comunicado recientemente su satisfacción por la magnífica labor de la Policía municipal de Parla. En total han puesto, por la acción policial 244 sanciones en un fin de semana. Por no llevar mascarilla (171), por botellones (41), por consumo de estupefacientes (6) y por incumplimiento de Ordenanzas Municipales (26).

Mucho mejor que en Getafe donde se han puesto 228, pero en un mes. La alcaldesa de Getafe está satisfecha. Hay más de un millón de multas de este tipo en toda España.

Parece que tras las 11 medidas aprobadas por el Gobierno, todo se va a centrar en culpabilizar a la gente de lo que pasa. Pero los hechos son tozudos y si vemos los rebrotes que hay, se suelen dar en sitios donde hay gran aglomeración de gente, durante mucho tiempo: Bodas, mataderos, en el trabajo como los temporeros o los *call centers*.

Vemos que según dicen una serie de científicos, a los que el Gobierno de momento no ha hecho caso ninguno, lo que falla es la estrategia tanto a nivel estatal como a nivel regional. Y alertan sobre la vuelta al cole y la situación de la sanidad, sobre todo la atención primaria.

Vemos que mientras se fríe a multas a la gente por no llevar mascarillas, que hasta hace poco eran casi dañinas, se permiten reuniones masivas como actos religiosos, o taurinos.

En Madrid el miércoles 26 se autorizaron tres corridas de toros en Alcalá de Henares, que ante el escándalo que se ha levantado se han visto obligados a suspender dos días después.

Y en Castilla La Mancha, gobernada por un socialista de derechas, Page, se suspende la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares... pero no las celebraciones religiosas relacionadas con las fiestas patronales.

Ahora acabamos de conocer que el Gobierno ha ofrecido a 2.000 militares como rastreadores. Nuevamente se utiliza a los militares, como en el caso del IFEMA o cuando las primeras ruedas de prensa, para cometidos que deben ser cubiertos por profesionales y contratados públicamente. No con voluntarios, ni con empresas que no tienen experiencia.

Perseguir a los de las mascarillas tiene un único fin. Desviar la atención de los auténticos fallos en la lucha contra la COVID. Mientras nos pagamos unos contra otros, se van de rositas los que han destruido los servicios públicos y que no parecen interesados en recuperarlos.

Obviamente hay que seguir los criterios médicos y hacerlos cumplir. Pero centrar la actividad en esto cuando no se toman las medidas para la vuelta escolar, las residencias vuelven a



Las aglomeraciones se producen diariamente en los transportes. Foto del metro de Barcelona



Las multas se cuentan por millones en España desde el inicio de la pandemia. Foto de la Puerta del Sol en Madrid

ser centros de contagio y la sanidad sigue en precario, simplemente es una vergüenza. Que las 11 medidas tomadas por el gobierno se dediquen a perseguir a la gente y se pase por alto la actuación de curas, empresarios y gobernantes irresponsables, es algo que merece el repudio de todos los demócratas.

Exijamos al Gobierno, a los gobiernos, medidas para hacer frente a la situación de emergencia, dotando a la sanidad, a la enseñanza y al sector de cuidados de los medios necesarios para impedir más muertes y contagios.

Jesús Béjar

Contratas del Ayuntamiento de Barakaldo: ¡¡Queremos cobrar!!

Hemos entrevistado a Cristian Figueroa e Iraida Patón y a los delegados sindicales Aurora Villalba (ELA) y a Gregorio Rojo (LAB) de Barakal-IMD, servicio del Ayuntamiento de Barakaldo dedicado a la limpieza de instalaciones deportivas y a Mari Carmen Martín, de CCOO, de la empresa CLEQUALI, contrata dedicada a la limpieza de locales municipales tales como escuelas, bibliotecas, guarderías, etc.

Nos reunimos esperando a la concentración de protesta que tienen convocada ante el propio Ayuntamiento de Barakaldo en una movilización que tiene como objetivo algo tan sencillo como cobrar su salario. Sí, tan solo eso.

Información Obrera: ¿Cómo cobrar? ¿Trabajáis gratis?

Compañeros entrevistados: Desde junio empezamos a cobrar mal, en dos partes, llevamos sin cobrar la paga extra de julio. Además de las

deudas tenemos también conflicto con las nóminas, que aparecen sin pluses.

Las empresas nos dicen que el Ayuntamiento no ha pagado las partidas que les debe y según ellos les

deja sin liquidez y el Ayuntamiento que los funcionarios que deben firmar los cheques están de vacaciones. Somos alrededor de 200 familias las afectadas por esta situación.

IO: ¿Esto os había pasado antes? Parece una situación disparatada...

CE: Pues sí, es disparatada, en 16 años hemos tenido cuatro empresas diferentes en las que nos han subrogado, y hubo otras antes. Según iban cambiando las que ganaban los concursos y se hacían con el contrato. Durante años los que dirigían directamente estas empresas eran del entorno del PSOE, igual que los que

gobernaban el Ayuntamiento, pero desde que ha cambiado el gobierno municipal con alcaldesa del PNV nuestras condiciones han incluso empeorado.

IO: ¿Y nadie se ha planteado la posibilidad de remunicipalizar estos servicios?

CE: Sí, EH Bildu y Elkarrekin Barakaldo han defendido esa posibilidad pero el acuerdo PSE-PSOE y PNV lo hace imposible.

IO: Dicen que estamos en una situación crítica debido a la pandemia, no solo respecto a la salud, también económica. ¿Cómo os ha afectado a vosotros?

CE: Lo de la pandemia ha sido tremendo, sobre todo en los centros deportivos. Tenemos varias denuncias en inspección de trabajo por diversas causas como la falta de material de seguridad con en los EPI (10 días con un traje que es para un solo uso), no ha habido pruebas PCR ni serológicas e incluso en un caso de una compañera que sospechaba haber estado en contacto con positivos nos dijeron que a los de la limpieza no nos aislaban porque no somos de "contacto directo".

Para haceros una idea: en un centro deportivo con aproximadamente 1300 usuarios hacemos tres turnos con una sola persona a la mañana de

9 a 14 h., otro turno de 14 a 21 h. y el de noche.

Solo el turno de mediodía, con tres personas, es el que desinfecta, el resto dicen que no es necesario. Por no hablar de la política de personal, en la que no se sustituyen las bajas ni las vacaciones. De hecho durante años hemos hecho el esfuerzo de hacer el trabajo completo con menos plantilla de la necesaria, como para que ahora nos vengan con estas.

IO: ¿Como es la situación sindical? ¿Hay unidad al respecto de vuestras reivindicaciones?

CE: En TEQUALI el Comité de Empresa está formado por delegados de ELA, CCOO y UGT que si estamos convocando juntos.

En Barakaldo-IMD estamos ELA, LAB y UGT. Los dos delegados de UGT no están participando así que somos los tres de ELA y LAB los que promovemos la movilización.

Pero en todo el sector y en ambas empresas hay afiliados de todos los sindicatos incluida UGT que se movilizan porque nuestro objetivo inmediato es sencillo: queremos cobrar.

Las cosas las dejan claras: van a seguir movilizándose todos los lunes frente al Ayuntamiento hasta conseguir su objetivo.



¿Qué va suceder con los trabajadores que siguen en ERTE?

En el peor momento del confinamiento, más de tres millones de trabajadores y trabajadoras llegaron a estar en un ERTE. Ahora siguen en esa situación cerca de 800.000 personas. Y según la normativa, verán reducidas sus prestaciones en un tercio a partir del 1 de octubre.

Recordemos que durante un ERTE se cobra el subsidio de desempleo. Según la norma que regula este subsidio, se recibe, durante los seis primeros meses de paro un 70 % de la base reguladora (calculada según la media de los últimos 180 días), y a partir del séptimo mes, se cobraría el 50%.

A estas cifras se les aplican unos topes mínimo y máximo. Para una persona que trabajara a tiempo completo, el importe mínimo de la prestación contributiva es de 501,98 €, y el máximo de 1.098,09 € (sin hijos), o de 1.411,83 € (con 2 o más hijos).

Para un trabajador a tiempo parcial, se aplican los correspondientes coeficientes de proporcionalidad.

Como es evidente, estar en un ERTE supone una importante pérdida de ingresos. Un 25% en el mejor de los casos. Para un trabajador que cobrara más de 1.400 € al mes, la pérdida es mayor (por ejemplo, para una persona que cobrara 2.000 euros, la pérdida es del 50%). Si se aplica la norma, a partir de octubre, las cerca de 800.000 personas que siguen en ERTE pasarían a cobrar un 50% de la base reguladora. O sea, un mínimo de 334 euros.



La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Cambios necesarios

Los sindicatos han anunciado que en la reunión que mantendrán con el Gobierno el 4 de septiembre para negociar la prórroga de los ERTE, exigirán que no se aplique la reducción en la prestación a partir del mes séptimo, y que se mantenga en todo caso a cobrar el 70% de la base reguladora.

Ahora bien ¿se van a modificar los porcentajes de cobro del subsidio sólo para los que estén en ERTE? Lo justo sería que se modificaran para todos los desempleados, porque ellos también tienen que comer. Es más, lo justo sería

que se prorrogara indefinidamente el cobro del subsidio, en una situación estructural en la que el sistema es incapaz de generar empleo para todos y todas.

Por cierto, ¿para cuándo la necesaria inspección de lo que están haciendo las empresas con los ERTE? Es vox populi que miles de empresas están dejando a los trabajadores en el ERTE para no tener que pagarles las vacaciones, y que otras muchas incorporan a los trabajadores a tiempo parcial, pero les obligan a trabajar jornada completa.

Luis González

De cobrar el 70% a cobrar el 50% del salario ¿A quién le importa?



Se acumulan las instrucciones sobre solicitar los ERTE, pero el cobro se hace esperar tres meses

En un *Información Obrera* anterior comenté la situación de los trabajadores a tiempo parcial que están en ERTE y hacía la siguiente pregunta. ¿Están incrementando las empresas el Coeficiente de Parcialidad con el porcentaje de horas complementarias trabajadas en los últimos 180 días? Comentaba que en caso de que la respuesta fuera negativa la incidencia podría ser fabulosa y muy lejos quedaría de la realidad la tan cacareada falsedad de que en el peor de los casos los trabajadores iban a cobrar el 70% de la media de las bases de cotización de los últimos 180 días.

Recordemos que antes de reducir al 70% se aplican unos topes máximos y mínimos. Para una persona que trabajara a tiempo completo, el importe mínimo de la prestación por desempleo sería de 501,98 €, y el máximo de 1.098,09 € (sin hijos), o de 1.411,83 € (con 2 o más hijos). Para un trabajador a tiempo parcial, se aplican los corres-

pondientes coeficientes de proporcionalidad, pero como decía anteriormente es muy probable que no se incluyan las horas complementarias porque no se está comunicando en muchas empresas el incremento del porcentaje de parcialidad de los trabajadores a tiempo parcial, lo cual afecta a la proporción en la que se aplican los topes máximos y mínimos.

Por no hablar de las numerosísimas incidencias en el cobro de los ERTE. En conclusión, la realidad es que la reducción en el mejor de los casos será del 70%, pero se trata de porcentajes mucho mayores según incida la aplicación de estos topes en cada uno de los casos.

Pero el juego de falsas proclamaciones no acaba ahí. Hemos escuchado en repetidas ocasiones que una de las medidas extraordinarias decretadas para los ERTE por causa de fuerza mayor por el gobierno de "coalición progresista" consistiría en que los

trabajadores afectados no consumirán su paro. Pero, ¿es esto cierto? La realidad es que a partir de octubre millones de trabajadores en situación de ERTE, si no se decreta una nueva medida extraordinaria, pasarán a cobrar del 70% al 50% de la media de sus bases de cotización, tal y como indica la norma para la prestación por desempleo una vez se pasa al séptimo mes en el cobro del paro. Es decir, que en octubre millones de trabajadores empezarán a cobrar el 50% en el ERTE, y en cuanto finalice el periodo de tiempo en el que estén en vigor las medidas extraordinarias (posiblemente a partir de 2021) los trabajadores comenzarán a consumir su paro no con un 70%, sino con un 50%.

En el camino del "No vamos a dejar a nadie atrás" todos habrán perdido, en el mejor de los casos, un 20% del supuesto paro que no se iba a consumir. Pero como veíamos más arriba se puede tratar de porcentajes mayores según la aplicación de los topes máximos y mínimos.

Y si seguimos por este camino de mentiras y medias verdades no es difícil predecir que más pronto que tarde se pondrá a cada uno en su sitio. Al menos esa debería de ser la principal tarea de los sindicatos que dicen representar a la clase trabajadora. Informar, decir la verdad, y tomar medidas para combatir la situación de miseria que aumentará en proporciones colosales en el Estado español.

¿Le importa a alguien la situación absolutamente desastrosa hacia la que nos estamos encaminando? ¿Cuántas personas han cobrado el famoso Ingreso Mínimo Vital del que ya nadie habla? ¿Cuál es la verdad? A veces hay que bajar de los cielos para ver lo que pasa en la tierra. A veces hay que decir las cosas como son.

Aitor Pazos

John Deere anuncia un plan mundial de bajas voluntarias en oficinas

El 26 de agosto la dirección de John Deere Ibérica reunió al comité de empresa a las 9,30 para informarles de un plan de bajas voluntarias a nivel mundial que ha decidido sacar la compañía. Este plan está enmarcado en el proyecto "Smart Industrial" que promueve el nuevo presidente de la compañía, John May, y con el que pretende hacer un nuevo diseño de la estructura de empleo en todos los niveles, haciendo mucho más hincapié en toda la vertiente tecnológica de las fábricas de maquinaria agrícola, para finalmente reducir puestos de trabajo.

La dirección no ha comunicado un objetivo concreto de reducción de personal. Este proceso se ha iniciado con una reestructuración de las capas más altas de dirección y ahora va descendiendo hacia los niveles siguientes de mandos intermedios, de empleados y a cada planta. Ya ha habido el cierre de una fábrica en China y la venta de SABO, una empresa de la compañía que se dedica a fabricar cortacéspedes en Alemania.

El plan de bajas voluntarias ha comenzado en Estados Unidos y ahora comienza en el resto de fábricas y países. Está dirigido a los empleados de oficinas y tiene un plazo que va del 1 de septiembre al 30 de octubre.

Defender todos los puestos de trabajo

A las 10,30, la dirección convocó a los empleados de la fábrica de Getafe y a las 11,30 a los empleados de la comercial que se encuentran en Parla para informarles directamente.

El comité de empresa se reunió a continuación de la comunicación con la dirección y decidió convocar una asamblea general que comenzaría ese mismo día en el turno de tarde y de noche y al día siguiente en el turno de mañana, donde se concentra la mayoría de la plantilla que ya se está incorporando de las vacaciones.

El comité de empresa recibió la información y va a valorar conjuntamente la medida que ha anunciado la compañía. Ha manifestado a la dirección que de ninguna manera va a aceptar ningún despido, ni salida forzosa de personal y ha planteado una reunión urgente del comité de

empresa europeo para coordinar informaciones y acciones en común en defensa del empleo.

CCOO en la asamblea planteó a la plantilla lo siguiente: estamos aquí para defender todos los puestos de trabajo. Lo primero que llama la atención es que la empresa anuncie este plan coincidiendo con la crisis brutal que se está provocando a partir de la pandemia de la COVID-19 y que está afectando a muchas empresas donde se plantean despidos y cierres.

Lo segundo es que, a pesar de los efectos de la pandemia, a nuestra compañía le van bastante bien las cosas. Se acaban de publicar los datos del tercer trimestre y John Deere ha tenido unos ingresos muy importantes. Incluso la acción de John Deere está en récord históricos. Se plantean esta reestructuración para ganar aún más.

Los trabajadores, en alerta

Debemos estar todos los trabajadores en alerta porque a nadie se le debe escapar que, si el año pasado ya plantearon un plan de bajas voluntarias en la comercial, y ahora se extiende a todos los empleados de oficinas, después de esto podrían plantear otras medidas que afectarían también a todos los operarios. A nadie le puede interesar el plan de la dirección porque tenemos unos buenos salarios y condiciones de trabajo en John Deere que nadie nos ha regalado, que se han conseguido luchando siempre. Por eso debemos estar todos preparados y en alerta para no permitir presiones de la dirección a nadie para que abandone su empleo "voluntariamente".

Debemos estar todos dispuestos a defender todos los puestos de trabajo. Lo más inteligente, como siempre, es ser solidarios, es que toda la plantilla nos apoyemos unos a otros, empleados con operarios y operarios con empleados, y juntos, con todo el comité y los sindicatos, estemos preparados, si es necesario, para luchar por nuestro trabajo y nuestras condiciones.

Pablo García Cano,
secretario del comité de
empresa de John Deere
y miembro de la ejecutiva de
CCOO Industria de Madrid



Reflexiones tras el acuerdo de Nissan

Puedes descargar esta hoja especial en nuestra web



La COESPE: el factor de orden del movimiento de pensionistas

El Gobierno mete prisas al Pacto de Toledo esta semana de septiembre, a puerta cerrada, con las comparecencias del Ministerio de Seguridad Social, la AIREF y el Banco de España, un acelerón para aprobar las recomendaciones. La urgencia de dar una imagen de unidad del PSOE, Unidos-Podemos, PP y Ciudadanos en el ámbito de las pensiones es un preámbulo necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Frente a viejas concepciones que conducían a aceptar la política posible, la que cabía en los estrechos márgenes de la política económica de los gobiernos, la COESPE en total independencia ha fijado sus reivindicaciones, ha modulado su funcionamiento, ha permitido desarrollar democráticamente el trabajo en común de muchas y distintas sensibilidades.

Esto la convierte en referencia para todo el movimiento obrero, con la convicción de que solo con la movilización se puede detener la ofensiva del capital financiero. La fortaleza de sus posiciones se asienta en el rechazo y oposición al Pacto de Toledo, y solo superando ese obstáculo logró elaborar su tabla de reivindicaciones y sus movilizaciones.

Los pensionistas han conseguido poner la defensa de las pensiones como uno de los elementos centrales de la agenda de la política del país. Entre los elementos de cohesión que fortalecen su movimiento podemos citar:

- Frente a las posiciones partidistas conciliadoras: centra su lucha en las movilizaciones sin aceptar seguidismos partidistas.
- Frente a los intentos gubernamentales de emparentar la Seguridad Social con la beneficencia, defendió el sistema de reparto como un sistema de derechos de la clase obrera.
- Frente a los tradicionales préstamos del Tesoro a la Seguridad Social, levantó la exigencia de que el Estado debía hacer las aportaciones necesarias para cubrir las pensiones ganadas con años de cotizaciones.
- Frente a la práctica gubernamental de descargar las crisis con la reducción de derechos y pérdidas de poder adquisitivo, llevó hasta el final su defensa del mantenimiento del poder adquisitivo exigiendo la actualización de pensiones según el IPC.

- Frente al Pacto de Toledo creado a iniciativa del partido de Jordi Pujol, que buscaba cambiar el sistema de reparto, reduciéndolo para dejar espacio a la privatización mediante los fondos privados de pensiones, la COESPE levantó su rechazo firme.

- Frente a los intentos gubernamentales, en colaboración con el Gobierno Vasco, de transferir competencias que rompen la igualdad de derechos del régimen de reparto, la COESPE levantó la defensa de la caja única.

- Frente a los intentos de “economistas y profesores de reconocido prestigio” al servicio de la banca, que para confundir identifican las cotizaciones con impuestos, la COESPE defiende que las cotizaciones sociales son un salario diferido, la base del derecho a pensión.

- Frente a la pasividad de los sindicatos se levantó la COESPE. Porque además proponen la creación de impuestos para financiar pensiones y cambiar la naturaleza de la prestación de viudedad

- Frente a los deseos de los partidarios del Pacto de Toledo, la COESPE se negó a admitirlas en su seno por entender que el Pacto de Toledo es contrario a los intereses de los pensionistas y la clase obrera.

- Frente a la pasividad ante las reformas de pensiones y la reforma laboral, la COESPE en defensa de los intereses de toda a clase obrera exige su derogación.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo

Las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que se quieren aprobar, salvo improbables sorpresas, son las de las sesiones celebradas en la anterior legislatura. Son contrarias a las reivindicaciones en muchos aspectos, entre ellos los siguientes:

El Presupuesto de la Seguridad Social seguirá soportando el pago de gastos impropios que deben pagarse con el Presupuesto del Estado. Se dice que eso solo sería hasta 2025, pero es difícil de creer, pues desde los inicios del Pacto de Toledo en 1995, se repite la cantinela de que el Ministerio de Hacienda debe asumir esos gastos. Y 25 años de incumplimiento son muchos años.

Esos “gastos impropios” crean un falso déficit de la Seguridad Social, que se compensará con préstamos, en vez de aportaciones, es decir, aumentando la falsa imagen de una Seguridad Social en quiebra, a que nos tienen acostumbrados.

Tampoco aparece ninguna indicación de que se vaya a anular la falsa deuda de la Seguridad Social con el Tesoro, fruto de la manipulación de cuentas que reiteradamente se hace al financiar con préstamos, en vez de aportaciones.

Escondiendo parte de los déficits del Estado en el pasivo de las cuentas de la Seguridad Social.

Entre las recomendaciones sigue estando la ya tradicional de entregar edificios del patrimonio de la Seguridad Social a las comunidades Autónomas.

Se valora adecuada la utilización realizada del Fondo de Reserva. Se recomienda que haya una dotación mínima al fondo de reserva del 7% del gasto anual de las pensiones contributivas, pero se condiciona a cuando existan recursos disponibles para ello.

Se señala que la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo computado para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y después se verá la posibilidad de que alcance toda la vida laboral.

Sobre el incremento de la pensión mínima, nada se dice sobre el IPREM congelado o sobre su subida al SMI. Dicen cosas que ofenden: dicen que no se pueden subir mucho las pensiones mínimas para no desincentivar la cotización, es decir, porque entonces los trabajadores no querrían trabajar.

Se recomienda el impulso a de los sistemas complementarios y vincularlos a la negociación colectiva, financiándolos con aportaciones del trabajador y la empresa. Poniendo los recursos en manos de las entidades financieras y, además con bonificaciones fiscales. Quieren convertir a los sindicatos en vehículos de conexión con los bancos.

Los saqueos de la Seguridad Social y la campaña de la COESPE

Al analizar los elementos en los que se basa la solidaridad intergeneracional del sistema de reparto, la COESPE ha constatado que ha sido y seguirá siendo una práctica regular de los gobiernos utilizar los excedentes de cotizaciones, no para constituir reservas, sino simplemente para



financiar gastos ajenos a las prestaciones propias del sistema de reparto de nuestra Seguridad Social.

Como señalan estudios sindicales, de las universidades e incluso en parte del Tribunal de Cuentas, son recursos cuantiosos. Por eso, la COESPE ha dispuesto realizar una campaña de recogida de firmas dirigidas a los diputados instándoles a decidir una auditoría pública sobre la utilización de los excedentes de cotizaciones para gastos impropios y sin constituir reservas, que en la situación actual serían suficientes para compensar la insuficiencia de las cotizaciones causada por las reformas laborales y hacer frente a la incorporación de nuevos jubilados de la generación baby.boom.

Es la forma concreta de deshacer toda la propaganda oficial y oficiosa de que no hay recursos para mantener el sistema y la pretendida necesidad de recortes, de reformas paramétricas y de abrir la Seguridad Social a los fondos privados de pensiones, y demostrar la falsedad de los déficits y las deudas de la Seguridad Social.

Efectivamente, la COESPE como movimiento libre e independiente por su defensa del sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, gobierno quien gobierne, se convierte en un factor de orden frente al caos generado por el poder y los poderosos para destruir los derechos sociales de la clase obrera.

Juan Miguel Fernández



Se celebra 7 meses después,
la IV Asamblea de COESPE de forma virtual
Nota de prensa 1 de set. 2020.
Puedes encontrar esta hoja en nuestra web

Exigen alternativas al cierre de una residencia de mayores en Vila-real

El 22 de agosto los familiares de los usuarios de la residencia Sant Llorenç de Vila-real (Villarreal, Castellón) recibían con sorpresa la llamada de funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, comunicándoles que el 15 de septiembre el centro iba a cerrar por un período de un año, al estar sancionado por un expediente administrativo.

Lo primero sorprendente es que se avise con tan solo un mes de antelación a los familiares cuando hay un aumento de contagios y alarma sobre la COVID-19.

También sorprende que hasta la fecha la residencia está autorizada y de hecho tiene ingresos solo unos días antes del anuncio por no haber plazas públicas suficientes.

Ante la situación un grupo importante de familiares de usuarios deciden constituirse como Plataforma para exigir la reubicación ordenada y total de todos los usuarios.

Se realiza una concentración ante la residencia, cuya dirección dice que ellos lo tienen todo en regla y solo tuvieron dos notificaciones de anomalías que datan de 2018.

Conselleria, a través de un alto cargo, manifiesta a los representantes de la Plataforma que el centro tiene más de 15 notificaciones de anomalías; algunas como el plan de evacuación antiincendios que el propio Ayuntamiento desconocía. Después de varias horas el representante de la Conselleria se compromete a estudiar expediente por expediente para, según sus palabras, «buscar reubicar a todos los ancianos».

Entretanto la Plataforma se ratifica en la reubicación de todos los usuarios, en que el auto de cierre no se lleve a cabo hasta la total reubicación y remite escrito al juzgado, Fiscalía y Conselleria de lo que ello puede comportar y las responsabilidades.

El martes 1 de septiembre se vuelven a reunir las partes con los representantes de Conselleria.

¿Cuál es verdaderamente el problema? Que en 20 años no ha habido un plan de la Conselleria para la construcción de residencias públicas, dejando el sector en manos de empresas privadas y principalmente religiosas.

Que en tanto que el presupuesto está atado al pago de la deuda, bien poco queda y se destina a otras cuestiones, dejando de lado uno de los pilares del Estado de bienestar.

Esta política, que era la de Cotino, del PP, y Cía., pocos cambios efectivos ha tenido con el cambio de gobierno autonómico antes con PSOE y Compromís y ahora con el de PSOE, Compromís y Podemos.

En estos momentos la Plataforma tiene el apoyo del Ayuntamiento de Vila-real que exige, al igual que todos los familiares, la reubicación de los usuarios con garantías.

José Almela, Información Obrera



Con familiares de mayores ingresados en la residencia St. Llorenç

Sin un plan de choque para la vuelta a clase, la huelga es necesaria, hay que extenderla

El escenario que el agravamiento de la pandemia de COVID-19 está abriendo en el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid es cada vez más preocupante. Al incremento de contagios se une la incapacidad y falta de voluntad de un ejecutivo regional que, lejos de haber trabajado en un plan consensuado con la comunidad educativa para diseñar un plan seguro de vuelta a las aulas, se ha limitado a bandear las movilizaciones convocadas por los sindicatos de docentes con el único fin de salvaguardar su imagen ante el electorado. Y ello con el objetivo de mantenerse en un espacio de poder que utiliza para promover la privatización de los servicios públicos, es decir, su precarización y desmantelamiento incluso.

En agosto, y ante la flagrante inacción de la Consejería de Educación, los sindicatos mayoritarios en Madrid, CCOO, UGT, CGT y STEM, tras sendas consultas a sus afiliados, decidieron convocar una huelga escalonada de dos días por nivel educativo al inicio de curso. El objetivo de la convocatoria era presionar para conseguir unas condiciones de seguridad dignas, que las instrucciones presentadas por la Comunidad de Madrid en julio hacían inviables. Al mismo tiempo, se presentaron varios recursos contencioso-administrativos que a día de hoy siguen en proceso contra esas instrucciones, por vulnerar la ley y por suponer una dejación de funciones por parte de la Administración.

El supuesto plan de Ayuso llega tarde es insuficiente y poco fiable

Ante esta movilización, el gobierno de Ayuso respondió con declaraciones vergonzosas en las que insistía en su menosprecio a los docentes, tachándolos de irresponsables. No obstante, las alarmantes consecuencias de la huelga para la imagen del ejecutivo le han obligado a improvisar un plan que la presidenta expuso el día 25 de agosto ante la opinión pública, es decir, a poco más de una semana del inicio del curso. Esta reacción ha evidenciado no sólo la conveniencia y oportunidad de esta convocatoria de huelga, sino la nefasta y oportunista gestión de un gobierno que sólo está dispuesto a actuar cuando la comunidad educativa decide presionar.

En principio, las promesas del plan de la Comunidad de Madrid podrían verse como un



Protestas de padres y alumnos ante la visita de Díaz Ayuso para la inauguración del curso escolar en el INE El Bercial de Getafe

avance en la dirección adecuada. Sin embargo, las incertidumbres y, sobre todo, la más que probada costumbre del actual ejecutivo de incumplir acuerdos firmados con los sindicatos obligan a ser muy cautos y a insistir en la necesidad de mantener las movilizaciones. Por el momento, las direcciones sindicales han optado por aplazar las fechas de la huelga a los días 22 y 23 de septiembre.

Ante la exigencia sanitaria elemental de reducir el número de alumnos por aula, el plan de Ayuso afirma a bombo y platillo "la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa". Sin embargo, la realidad es que se limita a plantear una reducción obligatoria de las ratios muy modesta y asimétrica, con un máximo de 20 alumnos desde infantil hasta primaria y de 23 para 1º y 2º de ESO. Los alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, lamentablemente, quedan abandonados a su suerte, manteniendo los topes máximos anteriores, con lo que tendremos grupos de más de 30 y hasta de casi 40 estudiantes con toda seguridad.

Para lograr esta bajada de ratio, que no llega a los 15 recomendados por los expertos sanitarios, Ayuso dice que va a contratar "a casi 11.000 nuevos profesores". Esta afirmación es, cuando menos, incompleta. Primero, porque solamente 7.400 irán a la pública y el resto, a la concertada. Segundo, porque no sabemos si en esos 7.400 se incluyen o no los interinos que fueron despedidos antes del verano y se reincorporan en septiembre,

unos 1.500 en total. Y, tercero, porque, según el propio consejero de Educación, esos profesores serán contratados temporalmente "y solo durante la duración de la pandemia". En ese caso, cuando se produzca produjera su despido, la situación en los centros será caótica, puesto que habrá que reubicar alumnos, profesores y materias en mitad del curso. ¿Hay un cuarto aspecto, relativo a que de esos 7.400 una buena parte podría ser contratados a tiempo parcial? Por ejemplo, si lo fueran todos a media jornada, debería hablarse de 3.700. Podría redactarse así -quizá pasándolo a punto tercero-: "Y cuarto, en la medida en que buena parte de ellos se tratara de contratos a tiempo parcial, su alcance sería aún menor".

Por otra parte, ni siquiera es posible conseguir las aulas necesarias para hacer efectiva esta modesta reducción de ratios. Muchos centros en Madrid llevan años saturados y es totalmente inviable encontrar más salas. Máxime cuando la Comunidad no se ha puesto aún en contacto con los Ayuntamientos ante la eventualidad de necesitar espacios municipales. Es decir, cuando ha desperdiciado todo el verano para organizar un verdadero plan de choque que permitiera encarar la situación adecuadamente.

Y esto solamente en relación a las ratios y los profesores. El resto de medidas, como la contratación de enfermeros para los centros (¿se pretende compensar con el nombramiento de un "coordina-

dor COVID-19" entre el profesorado!), la dotación de material de protección, la realización de tests a los docentes, etc son claramente insuficientes. Por no hablar de la supuesta solución que se plantea para la semipresencialidad en 3º y 4º de ESO y el Bachillerato, consistente en grabar las clases, algo que atenta contra el derecho a la imagen de los profesores y que, legalmente, debería ser sometido a la aceptación individual de cada docente.

La huelga marca el camino

La conclusión que se desprende de todo lo expuesto resulta evidente. El gobierno regional persiste en su política de desconsideración hacia la enseñanza pública. Una política cuya gravedad se dispara en el contexto de la pandemia. Nada bueno puede esperarse de esta situación si por nuestra parte no "ponemos toda la carne en el asador", esto es, sin desplegar toda la movilización que demanda tanto el profesorado como el conjunto del personal, así como el estudiantado y las familias, incluso de forma mayoritaria la población en general, preocupada por el debilitamiento de la enseñanza pública y por el riesgo de afectación a la situación sanitaria.

No deben comenzar las clases sin que estén aseguradas todas y cada una de las medidas necesarias para un desarrollo adecuado de la actividad educativa en este contexto pandémico. Tanto en términos sanitarios, como laborales y pedagógicos. La unión hace la fuerza, por eso instamos desde aquí a la extensión de la movilización al conjunto de la enseñanza pública madrileña, incluyendo por tanto a las universidades, al igual que a las otras comunidades autónomas en las que tampoco estén aseguradas dichas medidas.

Necesitamos la movilización, no una movilización testimonial, sino aquella que se desarrolle de forma democrática, con asambleas de centros coordinadas en un comité de huelga representativo; una movilización que llegue hasta donde sea necesario para permitir efectivamente el triunfo de la elemental reivindicación planteada: una vuelta a la actividad realmente segura, en condiciones laborales y pedagógicas adecuadas, lo que exige un auténtico plan de choque que incluya la dotación de todos los fondos necesarios.

Mario del Rosal y Javier Murillo,
profesores afiliados a CCOO

¡Lo que resulta «inconcebible» es una vuelta al cole sin garantías!



El ministro Illa en la rueda de prensa del 27 de agosto, en la que se presentan las medidas para la vuelta al cole, se enfadó porque ve "inconcebible que los padres lleven a un niño al centro escolar si no está en condiciones".

Inconcebible es que un gobierno "socialista", "progresista" y de "izquierdas" no derogue las reformas laborales que perpetúan la precariedad que hace que los padres tengamos que elegir entre perder el trabajo o cuidar de nuestros hijos enfermos. El 27% de las mujeres trabajadoras ha reducido su

jornada y el 11% ha cogido una excedencia para cuidado de familiares, tanto menores como mayores, teniendo en cuenta que esta reducción salarial no se la pueden permitir muchas familias. Otras han perdido el trabajo o no lo tenían y tratan de buscar un empleo. Pero la situación no es fácil, en plena crisis sanitaria y con la incertidumbre de la vuelta a las aulas, muchas mujeres no saben por dónde empezar.

Inconcebible es que entre los miembros del gobierno se desdigan en cuanto se plantean prestaciones para la clase de trabajadora. El plan "Me cui-

da" vuelve a cargar de manera especial contra la mujer trabajadora, siendo sus planteamientos el cambio de turno o la reducción de jornada. El hecho de acogerte a una baja si tu hijo es positivo reduce los ingresos al 75%, pero además deja en el aire el hecho de tener que guardar cuarentena si el positivo es alguien de tu entorno y la imposibilidad de acogerte a esta prestación.

Inconcebible es que se planteen las prestaciones como gasto, a la par que se niega una auditoría de la caja de la Seguridad Social para recuperar lo esquilmo y emplearlo para lo que fue

creado. Los abuelos y las abuelas, siendo población de riesgo, han sido clave en la conciliación. Y aún más, son el sostén económico con sus pensiones, a veces irrisorias, de muchas familias.

Inconcebible es que los centros educativos y el profesorado no se rebelen porque los planes de vuelta al colegio no son seguros.

¿Dónde están los recursos para garantizar una vuelta al colegio segura? La contratación de docentes queda en manos de las CCAA. La educación es un derecho fundamental de la infancia y el acudir a la escuela pública es la única manera de garantizar que no haya brecha digital y desigualdad social.

¿Dónde están los recursos para la sanidad pública, que garantice personal sanitario suficiente en atención primaria que pueda decirnos que nuestros hijos están en condiciones para asistir a clase y asegurar sanitarios en los centros escolares para esa responsabilidad que se pretende descargar en los docentes?

Hay que garantizar la salud de los niños y de las niñas y la seguridad en las escuelas. Se trata también de garantizar los cuidados cuando no puedan ir al colegio y de proteger el empleo de miles de familias que en este momento sobreviven como pueden. Inconcebible es no hacerlo.

Mujeres Republicanas de Barakaldo (Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, CATP)

¡Contra la chapuza discriminatoria y antipedagógica de la presencialidad a ratos!

Es imprescindible la dotación inmediata de los fondos para la presencialidad completa y segura

Nos llegan informaciones de institutos y sobre protocolos que expulsan de los centros a la mitad del estudiantado en semanas alternas. Es decir, para cumplir las ratios, se cargan la verdadera presencialidad.

Es el resultado de la ausencia de un verdadero plan de choque, con la dotación financiera que permita las contrataciones e infraestructuras necesarias para garantizar la presencialidad segura de todas y todos. Se vuelve así a imponer la llamada brecha digital, esto es, la discriminación a los pobres.

¡Hay que pararlo!

Redacción



Entrevista a Ana Granados, estudiante de Ciencias Políticas en la UCM y militante del Frente de Estudiantes

"Se condena al contagio a estudiantes, profesores y trabajadores no docentes"



Información Obrera: ¿Cuál es la actuación, o falta de actuación, del Rectorado y decanatos que provoca vuestra protesta? ¿Los exámenes presenciales sin garantías o esto es la gota que colma el vaso?

Ana Granados: En realidad, de cara a entender el cóctico escenario que está abordando la comunidad educativa de la Complutense, es importante remontarnos a marzo y abril. [...] Es en este momento donde el Rectorado, oficialmente, le pasa la pelota a cada facultad y se desentiende de la concreción de las medidas. [...] Más de la mitad de las facultades de la UCM fijaron septiembre para las recuperaciones; sin embargo, a finales de agosto y con una situación sanitaria muy delicada, seguimos sin tener información de ningún tipo más allá de lo que cada docente a nivel individual decide comunicarnos.

IO: ¿Qué solución planteáis? ¿Barajáis la opción de alguna medida de fuerza?

AG: [...] el debate que se está dando entre presencialidad y virtualidad está bastante falseado. Está claro que en un determinado contexto la crisis sanitaria puede exigir docencia telemática, pero también debemos entender que la adaptación a este tipo de enseñanza no es -ni ha sido- la alquimia que nos quieren vender [...] si bien la presencialidad es garante de determinadas cuestiones, no podemos obviar la necesidad de plantear medidas sanitarias efectivas a todos los niveles educativos: cuatro consignas evidentes no son un protocolo. [...] tras años de recortes y privatiza-

ción, la universidad pública no cuenta con los recursos necesarios para que la concreción de las -ya de entrada escasas- medidas planteadas tengan una traducción real en cada centro [...] los estudiantes de la pública -hijos de familias trabajadoras-, saben bien desde hace años lo que es dar clases en barracones por las nefastas infraestructuras; los pro-

“**¡Debemos plantar cara a la vulneración de nuestros derechos!**”

fesores conocen de cerca las implicaciones de la falta de personal y la masificación en las aulas; las familias saben que no siempre pueden conciliar y dejar de producir.

[...] en Madrid ya hay convocadas huelgas docentes a principios de septiembre para pelear por esas garantías reales en el inicio de curso en colegios e institutos [...] A nivel universitario [...] los estudiantes también debemos organizarnos y luchar. Debemos plantar cara a la vulneración de nuestros derechos, la falta de medidas sanitarias, el deterioro de la calidad educativa [...]

Extractos. La entrevista completa en la web de Información Obrera <http://www.informacionobrero.org>

¿Y en la universidad no necesitamos movilizarnos ante la inacción de las autoridades?

Convocada reunión de trabajadores y estudiantes de todo el Estado

Mucho se está hablando estos días en los medios de comunicación sobre la vuelta a clase... si se le puede llamar así a lo que se prepara. Pero casi exclusivamente de la enseñanza que va de infantil a bachillerato, apenas de la universitaria. Y los problemas son sustantivamente los mismos, tal y como explicamos en otros artículos de este número de Información Obrera y de números anteriores: la ausencia de una verdadera voluntad política de afrontar seriamente la situación por parte de las distintas administraciones (más allá de las diferencias entre ellas, con casos tan desgarradores como el madrileño, uno de los paradigmas de ataque con cuartel, en la Puerta del Sol, a la enseñanza pública en todos sus niveles).

Afrontarla seriamente implicaría antes de nada cuantificar los requerimientos que exige la situación, en cuanto al personal docente y no docente, especialmente sanitario, así como de medios materiales. Y proceder inmediatamente y sin ambages a la dotación de los fondos para la contratación y suministros que se necesitan. Sin embargo, a estas alturas, con el comienzo del nuevo curso programado para dentro de muy poco, seguimos sin conocer nada acerca de un auténtico plan de esas características.

Tenemos la experiencia del curso pasado. Oficialmente se presenta como un curso completado, con las actas con las calificaciones rellenadas, firmadas y procesadas. “Hemos sacado el curso adelante”, se dice. Pero sólo es cierto desde

una perspectiva burocráticamente administrativa, que prescinde del trasfondo real. Todas y todos lo sabemos: el esfuerzo del personal de las universidades y de los estudiantes sólo pudo permitir un apañío. No la universidad pública de calidad que necesitamos y por la que los estudiantes pagan y no precisamente cantidades testimoniales (y no se nos devolvió siquiera una parte de las tasas, después de casi medio sin las clases presenciales por las que habían pagado).

En la enseñanza preuniversitaria madrileña hay una convocatoria de huelga que, si se prepara y se lleva a cabo con la continuidad que la situación amerita, será la pauta a seguir. Porque es una convocatoria legítima y justa. ¿Y en la universidad? Todos los puntos de la convocatoria de dicha huelga son aplicables a la universidad: i) reducción de las ratios de alumnado por aula, desdoblado grupos; ii) aumento del personal docente y no docente, incluido el sanitario; iii) plan para la compensación de desigualdades y contra la brecha digital; y iv) dotación de todos los recursos materiales necesarios.

Para abordar estas cuestiones y valorar qué iniciativas poner en marcha al respecto, un grupo de trabajadores y estudiantes de distintas universidades de todo el Estado, de distintas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles o sin filiación alguna, se van a reunir en los próximos días. En los siguientes números de Información Obrera recogeremos su desarrollo.

[Para más información de la reunión, puede escribirse a la redacción]

Necesitamos un plan de investigación coherente y bien dotado financieramente

“La ciencia es el arma con la que los pueblos se protegen en la adversidad” dijo Pedro Sánchez en la presentación del Plan de choque para la ciencia y la innovación del pasado julio. Paradójicamente, los cerca de mil millones de euros prometidos representan sólo el 3% del gasto militar español en 2019. Es un buen resumen de lo que significa este plan. Por una parte, lleno de buenas intenciones que se quedan en nada. Por otra, abunda en dar dinero a la investigación privada en vez de asentar el sector público. Política de gobierno burgués al uso, alejada de toda realidad. España necesita, primero de todo, estabilizar la carrera investigadora y dotar de medianos y grandes equipos a grupos de investigación por todo el territorio, no poner las ideas científicas al servicio de la producción de plusvalor.

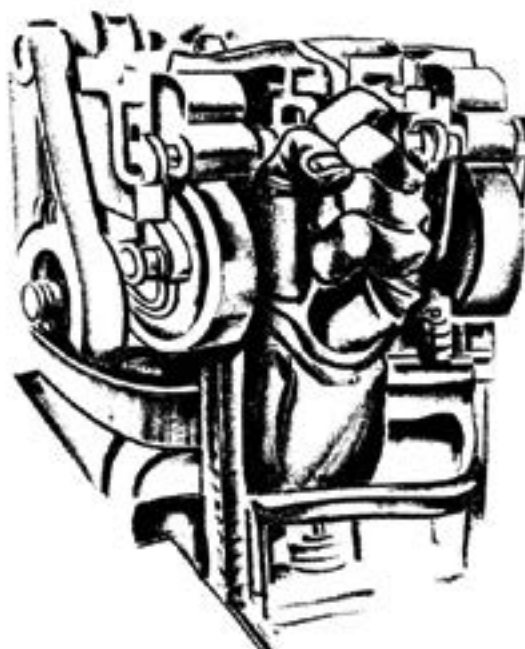
El documento se divide en tres grandes pilares. “Innovación e investigación en salud”, “Transformación del sistema de ciencia y atracción del talento” e “Impulso a la I+D+I empresarial”. Curiosamente, las motivaciones expuestas en cada apartado están bien fundamentadas y hacen una justa auto-crítica de la situación precaria de la ciencia en España. Sin embargo, cuan-

do se mete a detallar las soluciones, el plan se queda flojo. En suma, muchas de las medidas proponen recuperar en 2020 los niveles de inversión del año 2010, cuando la investigación estaba ya de capa caída tras la crisis.

Por la parte de la innovación en salud, se dan unas justas cantidades de dinero a dos institutos de sanidad que tienen ahora mucho peso en la crisis del coronavirus. Por supuesto, eso es bueno. Pero se entiende por su exposición que se hace para renovar estructuras puramente obsoletas y cubrirse las espaldas en el futuro. Parece un plan apresurado para que tras la crisis de la COVID no le saquen los colores al gobierno por tener esos institutos clave en una situación cohabitadora. En la misma línea, también se planea la creación de un centro de investigación de Medicina Personalizada para la investigación en nuevas técnicas de prevención y tratamiento y se promete un pequeño aporte para alargar algunos contratos postdoctorales del área de la salud. Todo esto eran peticiones que llevaban sobre la mesa mucho tiempo y que sólo aho-

ra, con la presión de una pandemia, se han llevado a cabo.

En el eje de “sistema de ciencia”, se propone la creación de una figura estable de entrada del personal investigador en el sistema público para afianzar la carrera científica en España. Una medida deseable y largamente espera-



da, pero sin un euro de financiación. El resto de propuestas son más bien cosméticas, nada contundentes. Se alargan unos meses o años ciertos contratos postdoctorales y se aumenta ligeramente el presupuesto de convocatorias de proyectos y pequeño equipamiento. Todo esto, que afectaría a más de 6.000 grupos de investigación en toda España, se pretende hacer con un presupuesto de 500 millones de euros, que es más o menos el doble de lo que se aportará en el eje de salud, orientado tan solo a unos pocos grupos e institutos. Como se ha dicho antes, ni siquiera se pretende llegar a niveles de financiación previos a la crisis, sino mejorar ligeramente lo presente. De plan de choque, nada.

La parte de ayudas a la “I+D+I empresarial” parte de un argumento erróneo. Se quiere equiparar la inversión privada al nivel de Europa. Sin embargo, la inversión pública es mucho menor, y ni siquiera se pretende mejorarla. En detalle, se da más de un tercio de la inversión prometida en todo el plan como ayudas directas a empresas y se comprometen

500 millones en préstamos. Las condiciones que ponen, oscuras y llenas de tecnicismos incomprensibles, parecen diseñadas para acabar en los departamentos de “innovación” de las grandes empresas. En todo caso, parecen medidas más bien de fomento de la industria que otra cosa. Poca ciencia.

Buena declaración de intenciones, pero sin financiación. “Plan de choque”, pero sin plan a largo plazo. Equiparar la inversión privada con la de los países del entorno, pero no la inversión pública. En resumen, nada nuevo.

Lo que precisa realmente la ciencia en España es un plan de investigación coherente y bien dotado financieramente, para tener empleos estables y bien remunerados que sienten las bases del desarrollo científico a largo plazo. Un desarrollo científico, además, que sirva no a los intereses de unos pocos sino a los de la mayoría. E instamos a todos los actores científicos y sindicales a defender esto, frente a los intereses del gran capital, que sabe mover bien sus hilos para acaparar todos los esfuerzos de la sociedad.

A. García
 Investigador Predoctoral en el
 Centro Superior de Investigaciones
 Científicas (CSIC)

Una nueva oleada de movilizaciones y crisis políticas

En nombre de la lucha contra la pandemia, los diferentes gobiernos no dudan en algunos casos en intentar llamar a una supuesta «unidad nacional» para integrar la organizaciones obreras y hacerles olvidar las reivindicaciones y/o al mismo tiempo tomar las medidas represivas que intenten impedir una explosión social. La descomposición del sistema de producción capitalista, que explica el impacto sanitario de la pandemia, produce ya decenas de millones de nuevos parados a escala mundial y el surgimiento en continentes enteros de una oleada de hambre. Paralelamente, las grandes fortunas ven crecer sus beneficios, en particular las ligadas a los sectores más parasitarios de la producción, como Amazon, basada en la sobreexplotación del trabajo y la desregulación. Amazon de Jeff Bezos, según la revista Forbes vale hoy 113 000 millones de dólares, en segundo lugar ex aequo Microsoft y Facebook alrededor de 99 000 millones de dólares (el «pobre» Amancio Ortega de Zara se queda lejos con 55 000 millones). O sea que en un año en que la riqueza global se ha reducido ya un 8% a escala mundial, ¡las bolsas mundiales registran un aumento de la capitalización de 300 000 millones de dólares! La aceleración de la crisis provoca por tanto una agravación de las diferencias entre las clases, al mismo tiempo que se produce un empobrecimiento de la clase obrera asalariada o pensionada, una eliminación masiva de las capas medias, pequeños propietarios y trabajadores «autónomos».

Al calor de esta crisis también el imperialismo intenta «solucionar» por la fuerza conflictos históricos, como la cuestión palestina. Pero el «acuerdo» del gobierno sionista con los emiratos ha suscitado una nueva oleada de resistencia (es significativo para nuestro país la posición del gobierno Sánchez que se caracteriza él mismo de progresista).

Pero si tenemos que resaltar los elementos más significativos de la resistencia a escala internacional tenemos que partir de los Estados Unidos.

Recordemos que el año 2019 estuvo recorrido por movilizaciones inéditas desde Chile a Hong Kong, pasando por Francia con los Chalecos Amarillos y las movilizaciones obreras contra la reforma de las pensiones. La llegada de la pandemia y su utilización ha sido,

como hemos dicho, utilizada para poner freno a estas movilizaciones (por ejemplo, en el Líbano el gobierno totalmente deslegitimado después de la explosión de Beirut, ante la crisis revolucionaria ha declarado el estado de emergencia y el confinamiento total).

En efecto, desde el 25 de mayo, día del asesinato de Georges Floyd, han seguido tres meses de movilizaciones que recorren todo el país. Movilizaciones protagonizadas por la juventud, de todas las razas, que plantea la oposición a TODO el sistema y por tanto al régimen de los dos partidos burgueses que se alternan en el poder. En estos momentos, la movilización plantea también la «autodefensa» de la población negra, víctima de la violencia policial y de las «milicias» blancas armadas.

En Europa, las movilizaciones de Bielorrusia plantean una cuestión central al movimiento obrero. En primer lugar, el papel preponderante de la clase y sus reivindicaciones. Ante los supuestos «complots» imperialistas que llevarían incluso a caracterizar al déspota Lukashenko como un «adalid» del socialismo (que en su conflicto apenas velado con Putin amenaza con la apertura al mercado de las empresas estatales, no es por casualidad que los sindicatos oficiales en Rusia, controlados por Putin estén apoyando las movilizaciones en Minsk). La realidad de

la lucha de clases demuestra lo contrario. Estas huelgas y manifestaciones permiten establecer la relación entre los trabajadores de Bielorrusia, de todas las repúblicas de la ex URSS y los trabajadores de Europa occidental que resisten frente a las contrarreformas dictadas por el capital financiero.

Los artículos que publicamos en estas páginas, a pesar de su diversidad, tienen una unidad, la unidad de la lucha de clases internacional.

Angel Tubau
29 de agosto



Gaza, 18 de agosto

Publicamos en nuestro *Información Obrera* especial n.º 17 una propuesta de los camaradas griegos del NAR de preparar un encuentro europeo. Grupos de militantes de diferentes países, entre ellos el nuestro y desde IO han respondido positivamente.

El Comité Obrero de Correspondencia Europea, que se formó el 4 de mayo de 2019 en una Conferencia en París, publicará en los próximos días un Boletín con los diferentes documentos que plantea la necesidad de una campaña europea y prepara un Encuentro en los próximos meses en defensa de las reivindicaciones obreras y democráticas, por la independencia del movimiento obrero frente a la política del gran capital y la instituciones y gobiernos a su servicio.

El gobierno español apoya el acuerdo de «normalización» establecido entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos

En 2015 Pedro Sánchez escribió en su cuenta de Twitter que cuando fuese presidente reconocería al gobierno palestino. Sin embargo hace unos días el gobierno emitió un comunicado apoyando el acuerdo al que han llegado las monarquías medievales del Golfo, EAU donde se ha refugiado el Borbón, con el gobierno sionista israelí al margen de los palestinos siendo el tercer gobierno (tras Egipto y Jordania) que reanuda las relaciones con Israel a pesar de su compromiso en contra (nota redacción).

El cínico comunicado del gobierno de coalición progresista viene a señalar que desea que este acuerdo basado en los dos estados sirva para llevar la paz a la zona. De lo prometido, como en otras muchas cosas, nada.

No es el único guiño a la administración Trump. En el mes de Julio el gobierno. Por medio de la vicepresidenta Calvo, ha confirmado que España se suma a la definición de antisemitismo del IHRA. Según esta definición, «el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos».

No es una definición baladí. Ya que lo que supone es que cualquier crítica al gobierno israelí de racismo puede ser considerada como delito de odio.

Adjuntamos un extracto de un artículo de Informations ouvrières sobre el acuerdo EAU-Israel. (La versión completa puede verse en la web de IO).

Anunciado por los medios a bombo y platillo, el acuerdo de «normalización» establecido entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU, que agrupan siete emiratos del Golfo Pérsico, entre ellos Abu Dabi) bajo supervisión estadounidense ha sido presentado por el presidente Donald Trump como «un acuerdo de paz histórico»... aun cuando los EAU y el Estado de Israel nunca han estado en guerra.

No es el primer tratado de normalización Entre el Estado de Israel y un país árabe, y muchos militantes palestinos consideran que la renuncia a la carta de la OLP y la creación de la Autoridad Palestina eran ya medidas de normalización que, por otra parte, no impidieron los movimientos de rebelión contra la política colonial israelí ni contra la Autoridad Palestina normalizada, todo lo contrario.

La gran novedad del presente acuerdo es

que no exige nada a cambio al Estado de Israel. El quimérico Estado palestino, regla de oro de las relaciones internacionales, ni siquiera se menciona. El principal dirigente de los EAU, el príncipe coronado de Abu Dabi, Mohamed Ben Zayed, anunció, sin embargo, que el Estado de Israel renunciaría, a cambio, a su plan de anexión de una parte de Cisjordania. Al mismo tiempo, Netanyahu explicaba en la televisión israelí que si bien el plan se había aplazado –lo que ya era el caso antes del anuncio del acuerdo con los EAU-, él no había renunciado al mismo. Teniendo en cuenta la oposición a la aplicación del plan de anexión en el interior mismo del Estado sionista y el desacuerdo interno con la política de Netanyahu, resulta difícil decir si verá la luz. Dicho esto, para muchos militantes palestinos la exigencia de anulación del plan de anexión no es más que una operación mediática para hacer pasar el plan que en su opinión no cambiaría gran cosa la realidad sobre el terreno.

En su sesión informativa del 14 de agosto, Donald Trump habló de acuerdo histórico e indicó que Israel «suspendía los asentamientos en Cisjordania», cuando la discusión hace referencia claramente a una «suspensión del proyecto de anexión» (...). Esta nueva normalización podría ser un test para la que se estaría preparando con Arabia Saudí (que podría ser muy mal recibida por una población de 34 millones de habitantes reputada de ser palestina, bajo presión tras cinco años de guerra contra Yemen y que empieza a sufrir los efectos de la crisis que pone en dificultades las finanzas del reino). (...)

Para Aaron David Miller, antiguo diplomático estadounidense que fue negociador de paz israelí-palestina en las administraciones democráticas y republicanas (despacho AFP del 15 de agosto), «la motivación de la administración nada tiene



que ver con la paz israelí-palestina (...). Se trata de dar una buena imagen del presidente, de demostrar una cierta competencia y cumplir al menos un cierto grado de lo que la administración

intentó hacer desde el principio – que es establecer la paz entre Israel y el mundo árabe (...).

François Lazar (traducido de Informations Ouvrières - Francia)

Decenas de miles de manifestantes gritan «Lukashenko, ¡vete!»



Desde el domingo 9 de agosto, cuando se publicaron las primera estimaciones oficiales de los resultados de las elecciones presidenciales, miles de bielorrusos han salido a las calles en todas las ciudades del país.

Una feroz represión se desencadenó inmediatamente: 3 000 personas detenidas en un solo día, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma. En Brest, llegó a dispararse con fuego real. Los manifestantes detenidos en condiciones inhumanas. Uno de ellos decía: «las personas estaban tendidas, como en un tapiz viviente, en un mar de sangre».

Pero esta represión salvaje no ha hecho más que fortalecer la movilización, que creció hasta la gigantesca manifestación del 16 de agosto, en la que decenas de miles de bielorrusos exigieron la salida del presidente Lukashenko, al grito de «¡Vete! ¡Vete!».

Naturalmente, se multiplican las maniobras imperialistas. Los jefes de Estado de Reino Unido, Francia y Alemania han afirmado su apoyo a los manifestantes. Pero la movilización actual en el país, el verdadero levantamiento del pueblo y de la clase obrera, de ninguna manera puede asimilarse a la «revolución naranja» de Ucrania en 2004, totalmente instrumentalizada por el imperialismo, en particular el de los Estados Unidos.

No, lo que domina actualmente la situación en Bielorrusia es la entrada en movimiento de la clase obrera. Fábricas absolutamente determinantes para la economía del país, van a la huelga. Esas huelgas, cada vez más numerosas, dan el contenido social del levantamiento actual y de la consigna unánime: «¡Vete!»

Daniel Saphira (traducido de Informations Ouvrières - Francia)

Siguen las manifestaciones y las huelgas en Bielorrusia

Se han difundido ampliamente las imágenes del presidente de la República bielorrusa bajando de su helicóptero en pleno centro de la capital, armas en mano, con su hijo pequeño cubierto por un chaleco antibalas y portando un arma. El presidente se aproxima al cordón de las fuerzas policiales y les da las gracias diciéndoles: «¡Sois magníficos! ¡Vamos a ocuparnos de la situación!» Al otro lado del cordón, decenas de miles de personas, con sus hijos y familias...

Amplios sectores de la población se han puesto en movimiento. Incluso apoyan los trabajadores de la televisión republicana, rápidamente reemplazados (¿de manera temporal?) por trabajadores invitados de Rusia. Los profesores son amenazados de despido por su falta de patriotismo.

Todo ello sucede en esta República dirigida por un presidente clavado en su sillón desde hace veintiséis años. Nada raro en un país de la antigua URSS. En todas las antiguas repúblicas soviéticas, viejos funcionarios inamovibles del partido comunista de manera autocrática. En la mayoría de ello, los presidentes no representan al pueblo y gobiernan amenazándolo.

La suerte de los países pequeños es ser juguete de los «imperialismos». Lukashenko sigue ofreciéndose a Putin, siendo su oferta más reciente darle la posibilidad de probar la vacuna rusa contra la Covid 19 en Bielorrusia. Todo ello para convencer al aliado ruso de su lealtad y evitar la ocupación directa de la República, como ha sucedido en otras antiguas repúblicas soviéticas. Lukashenko, sin embargo, no está contento con el Kremlin que lleva contra él una guerra de información desde hace largo tiempo.

En cualquier caso, la clase obrera bielorrusa se ha puesto en marcha y está en el centro del actual proceso político.

El movimiento de los trabajadores al margen de los sindicatos de Estado se acelera y muchos se afilian a sindicatos independientes. Se han creado en toda la República comités de huelga para dirigir las manifestaciones locales, agrupando a trabajadores de sindicatos independientes y no afiliados. Los días 23 y 24 de agosto han detenido a los dirigentes de los comités de huelga de la fábrica de automóviles de Minsk y de la fábrica de tractores de Minsk. Pero esto no ha descabezado a los comités de huelga. El 24 de agosto, en una de las mayores factorías de la República, Belaruskali, comenzó una huelga de brazos caídos.

Los trabajadores en huelga tienen una reivindicación principal contra la reglamentación

del Código Laboral, que los convierte en semi-esclavos, sin garantía de empleo. Todos los empleados tienen contratos temporales. Las huelgas masivas aterran al poder autocrático, por lo que el presidente ha girado recientemente, evocando posibles concesiones y una salida condicionada de la presidencia. El 22 de agosto había amenazado con organizar un lock-out a los huelguistas y despedirlos. Lanzó incluso un llamamiento a trabajadores extranjeros para romper la huelga, por ejemplo a los mineros ucranianos, pero hasta hoy ningún directos de mina le ha respondido...

Sin ninguna duda, el despertar de la clase obrera bielorrusa tendrá repercusiones más allá de las fronteras del país, en Rusia, en China...

Corresponsal en Minsk (traducido de Informations Ouvrières - Francia)

«En las altas instancias del Estado, preocupa la reacción de los franceses»

Hace una semana, el gobierno ha dado un paso más en sus medidas: obligación de llevar mascarilla incluso en el exterior en un número creciente de comunas, pese a la opinión contraria de eminentes científicos.

Y ello acompañado de pesadas sanciones: multas de hasta 1 500 euros y 3 750 euros más seis meses de cárcel en caso de reincidencia.

Las amenazas se cumplen de manera brutal. CRS con cascos y equipados como Robocop entran en un café y aporrean a la gente para imponer el uso de la mascarilla. Un empleado de un supermercado de los Alpes Marítimos es detenido y esposado por llevarla por debajo de la nariz... ¿Por qué tanta saña? El gobierno Macron-Castex teme la resistencia de la población, de los asalariados, de los jóvenes a los ataques que pretende imponer: destrucción de puestos de trabajo, de servicios públicos y de todas las conquistas sociales.

¿Se sostendrán las mentiras? La indignación popular escamoteada por tres meses de confinamiento sigue ahí. El gobierno espera contenerla utilizando la mentira, el miedo y la amenaza.

Los grandes medios alimentan esta campaña: nada de reuniones, nada de manifestaciones, denuncias unos a otros. Más os vale: las multas, las es-

posas y las porras no andan lejos. Sin embargo, en los últimos días se insinúa una duda, prudentemente, en los grandes diarios: ¿se sostendrán las mentiras y las amenazas gubernamentales? Le Figaro publica sorprendentemente en su portada del 21 de agosto: «Preguntas sobre una epidemia que progresa sin agravarse» con el titular: «Covid, la paradoja de una epidemia que avanza sin empeorar».

El artículo repite después la propaganda del gobierno, pero subraya: «Ciertamente, aumentan cada día los casos positivos, pero el número de hospitalizaciones, ingresos en cuidados intensivos y muertes —que nos dicen desde el principio que son los únicos indicadores— sigue extrañamente bajo.»

Les Échos del 21 de agosto comienza con un titular alarmista: «Aumentan en Francia, Alemania y España los casos de Covid 19», pero se modera enseguida: «La propagación del virus viene confirmada por el aumento de la proporción de seropositivos entre las personas a las que se realizan las pruebas. Lo que no siempre se traduce, siete semanas después del inicio del rebrote, en un aumento notable de muertes, reanimaciones u hospitalizaciones en Europa, salvo en España.»

Le Figaro del 24 de agosto parece dar la señal de alarma al ejecutivo (Macron y Castex): «En el barómetro

del JDD, la cota de popularidad de Jean Castex baja 7 puntos hasta caer por debajo de la barrera del 50%, hasta el 48%. Una primera señal inquietante cuando el primer ministro, desconocido por los franceses antes de su nombramiento, no ha dejado de desplazarse por toda Francia durante el mes de agosto, prueba de que la comunicación no lo puede todo.» Finalmente, Le Monde se pregunta el 25 de agosto sobre el retraso de la presentación del plan de recuperación de Macron y Castex, que el Eliseo justifica así: «Nos ha parecido más oportuno aplazar la presentación una semana para que los franceses tengan tiempo de asimilar las nuevas reglas sobre mascarillas y preparar serenamente el comienzo de curso.» El artículo de Le Monde continúa: «En las altas instancias del Estado, preocupa la reacción de los franceses a su vuelta de vacaciones, mientras que las medidas sanitarias se endurecen día a día... Los incidentes vinculados al respeto de las medidas sanitarias se multiplican, con personas que se niegan a llevar la mascarilla en las calles de las ciudades que lo han hecho obligatorio, o que deciden participar en concentraciones estando prohibidas las de más de diez personas.» «El presidente está muy atento a todos esos incidentes que son, para él, la otra vertiente de la crisis de autoridad que atraviesa el país» (el Eliseo dixit).

Frente al gobierno Macron-Castex que agita amenazas y sanciones en todos los ámbitos, la defensa de las reivindicaciones obreras, de las conquistas de 1936 y 1945, pone en el centro el combate por la democracia, el com-

bate palmo a palmo en defensa de las libertades de manifestación y de organización.

Bruno Ricque (traducido de Informations Ouvrières - Francia)



24 de agosto, multas de 135 euros por no llevar la mascarilla en Francia

Violencia sistémica y explosión revolucionaria en Estados Unidos



Kenosha, 24 de agosto

Mientras en Estados Unidos la movilización provocada por el asesinato de George Floyd a manos de la policía sigue en marcha, Jacob Blake, otro hombre negro de Wisconsin lucha por su vida tras recibir hasta siete disparos por la espalda por un policía de la ciudad de Kenosha. Las imágenes de la brutal agresión, captadas en un vídeo y difundidas en todo el mundo, no dejan lugar a interpretaciones ni matices.

La violencia policial contra los negros no es un hecho aislado, es violencia sistémica.

Desde las páginas de este periódico, manifestamos todo nuestro apoyo a la movilización del pueblo estadounidense luchando por sus justas reivindicaciones.

Reproducimos a continuación las primeras líneas de una contribución sobre los tres meses de movilizaciones y la actualidad que nos ha transmitido el militante estadounidense Rodrigo Ibarra. El texto completo puede consultarse en nuestra web.

Rodrigo Ibarra, 8 de agosto de 2020

Al asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020 siguió una verdadera explosión revolucionaria que comenzó en Minneapolis y rápidamente se extendió a la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, grandes y pequeñas. Esta explosión revolucionaria se caracteriza por ser un movimiento de carácter nacional, se caracteriza porque, a diferencia de otras explosiones sociales que se dieron en el pasado, esta de multirracial; es un movimiento de masas; es un movimiento que también se caracteriza porque haber salido a la calle la gente corriente, gente que regularmente no se involucra en la política,

que no son militantes; otra característica de la situación revolucionaria actual es que está mayormente compuesta por jóvenes pobres de Estados Unidos.

La energía producida por esta explosión revolucionaria ha alcanzado todos los niveles institucionales, desde las alcaldías en las ciudades, los gobiernos estatales y al gobierno federal. Atravesó todo el entramado institucional. La crisis del sistema político, sin embargo, viene de lejos.

La crisis del sistema político no es algo nuevo. Viene de antes de esta explosión social, principalmente dentro de los grandes partidos del gran capital, el Partido Republicano y el Partido Demócrata.

Dentro del Partido Demócrata la crisis se expresó en un verdadero movimiento obrero y comunitario (negro, latino, asiático y otros). Este movimiento tras del senador Sanders logró aglutinar a un sector importante del movimiento obrero organizado y a un sector también importante de las comunidades, así como otras organizaciones políticas importantes de tendencia socialistas, como Democratic Socialist of America (DSA) y Our Revolution, con programas más avanzados que el mismo programa de Sanders.

La explosión social de junio produjo cambios radicales en la situación, porque esta explosión social no reconoció a ninguna de las agrupaciones canalizadas por el senador Sanders, o en ninguna de las otras organizaciones pre-existentes. Más bien superó en la acción a cualquiera de las organizaciones existentes.

(Ver texto íntegro en la web)



Minneapolis, 24 de agosto

Piñera ya no gobierna en Chile, solo le queda la represión

La reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los ahorros previsionales no fue inocua, sus consecuencias aún no logran apreciarse en su real dimensión. En primer lugar, fue un golpe certero al corazón del sistema de capitalización individual; al mismo tiempo, un golpe mortífero al gobierno de Sebastián Piñera. Éste se había empeñado junto al gran empresariado, la derecha y una parte importante del Congreso en impedir, a como diera lugar, la aprobación de este proyecto debido a que estaba en juego uno de los pilares más importantes del sistema.

Piñera movilizó a sus ministros más importantes para que evitaran la aprobación, mucho se jugaba en esto. Cuestiones simbólicas. Las AFP han permanecido intocables por 40 años y abrir la puerta era peligroso, pues las AFP son a los Piñera, José y Sebastián, lo que la Constitución es a Jaime Guzmán, cayendo una, la otra se debilita.

Durante mucho tiempo los defensores del ordenamiento institucional, que ha permanecido invariable, en lo esencial, por 40 años, saben, que provocar cambios estructurales es peligroso para el modelo de privilegios de unos pocos.

Y el momento actual, además de ser inoportuno para quienes se han opuesto por años a los cambios, genera muchos alicientes para quienes aspiran en el próximo plebiscito dar inicio al diseño de un nuevo país que restituya derechos y ponga fin al modelo de despojos instalado en dictadura y consolidado en "democracia".

En octubre de 1980 nació la Constitución Política, y un mes después, en noviembre, nacieron las AFP. Son por tanto, los pilares de la dictadura que después de 40 años aún permanecen dictaminando los destinos de quienes viven en nuestro país.

La historia nos muestra, muy frecuentemente, que los gobiernos débiles que no gozan de respaldo popular, son peligrosos. Buscan proyectar una imagen de solidez cuando no la tienen. Para mostrarse fuertes generalmente utilizan la herramienta que más cerca tienen a mano, la represión.

El uso de la fuerza ha sido la característica con la que Piñera y su gobierno ha enfrentado el conflicto social. Se evidenció con el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca y con la sostenida represión contra los estudiantes del Instituto Nacional durante su primer año de gobierno. Continuó durante 2019, hasta que, producido el estallido social del 18 de octubre, la represión adquirió ribetes propios de un régimen totalitario, de una tiranía. Miles de personas hubieron de pagar la represión de Piñera con la pérdida de sus vidas, otros, con la pérdida de sus ojos, centenares fueron objeto de tortura y fuerte represión, y muchos, debieron soportar la prisión hasta el día de hoy.

El gobierno de Piñera está débil, ello no significa, parafraseando a su ex ministro, «que mute y se ponga bueno», por el contrario, como todo régimen político que se encuentra en bancarrota, puede resultar muy peligroso para la integridad física y moral de quienes expresan la oposición a sus políticas, en particular, para quienes se manifiestan a través de la protesta social y desde los movimientos sociales.

Se confirma lo anterior con la respuesta que Piñera da a la crisis que vive el país. El cambio de gabinete es, claramente, una señal de mayor dureza, de menos diálogo y mayor represión. Instala el gabinete del rechazo. Personajes como Allamand y Pérez claramente defensores de la constitución

pinochetista, harán todo lo que este a su alcance para hegemonizar la estrategia del miedo y de la mentira, buscando como lo hicieron en el pasado atemorizar a la ciudadanía respecto de que los cambios son perjudiciales y que aquellos que los demandan no son sino personas, que buscan acabar con el Estado de Derecho. Ese es, ha sido y quizá siga siendo, el contenido del discurso catastrofista que instalan cada vez que el pueblo se levanta exigiendo transformaciones sociales.

Se confirma esta afirmación con la realidad, bastaron solo tres días de asumido el nuevo ministro del interior, para que el escenario de violencia extrema se desatara en nuestro país. Su visita a la zona de WallMapu y sus declaraciones destempladas en materia de derechos humanos, fueron la chispa que desató la violencia en la provincia de Malleco, violencia que se pone a tono con los sectores más radicales de la derecha, que piden más mano dura en la zona, no comprendiendo que el problema tiene ribetes mucho más complejos que la sola represión.

La chispa la encendió el gobierno, ya no solo es la provincia de Malleco, el conflicto se extiende hacia Arauco, Cautín y el Bio Bio. La solidaridad crece a lo largo del territorio nacional con el Pueblo Mapuche, cuyas demandas ancestrales no han sido escuchadas por el Estado chileno a los largo de décadas, por el contrario, siempre se ha recurrido, desde la llamada «pacificación de la Araucanía» a dar como respuesta la represión. Ello nos plantea asumir en el nuevo diseño político que debemos construir entre todos y todas -una vez que se acabe con la Constitución pinochetista-, los derechos que debemos reconocer al pueblo Mapuche

Las cartas están echadas, por un lado la ciudadanía, el pueblo, los y las trabajadoras, lograron durante el mes de julio una gran conquista, y ese triunfo debe ser calibrado en su justa medida. Ahora hay que mirar hacia delante, sin perder de vista al gobierno y al Congreso. Son estos los momentos difíciles, un régimen que es sometido a presión, una institucionalidad que comienza poco a poco a desmoronarse es la señal de que avanzamos hacia algo nuevo.

El régimen político actual con sus instituciones hará lo imposible por efectuar cambios para que todo permanezca igual. Es la política del gatopardismo que se estrena en estos momentos, a través de reformas que el gobierno, en su estado calamitoso, junto a un sector de quienes se ubican en la supuesta oposición intentan presentar como avances en un momento en que la ciudadanía pide a gritos cambios estructurales. La reforma al sistema de pensiones que lideran los senadores Letelier y Goic busca mejorar las pensiones; pero, dejando intactas a las AFP, vale decir, consolidar el modelo fracasado de capitalización individual que la ciudadanía a lo largo del país ha cuestionado y que es la antípoda de la seguridad social.

¿De qué depende que avancemos hacia una verdadera democracia?, depende de que nos mantengamos en vigilia, más unidos que nunca, el 25 de octubre es una primera parada, debemos ganarla con la fuerza de nuestro pueblo, que nos permita avanzar hacia verdaderas transformaciones, que por años la mayoría ha demandado. De nosotros, hombres y mujeres de este territorio, depende.

Luis Mesina

Secretario general de la Confederación de trabajadores de la banca, portavoz de la Coordinadora NOMas AFP

Me abono a
**INFORMACIÓN
OBRERA**

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ - BANKIA ES87 2038 1170 3760 0058 6903

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €

